



Reflexiones, historias y luchas contra la violencia de la economía verde

Boletín del WRM 264

Enero 2023

[Acceda al boletín en el sitio web](#)

SUBSCRÍBETE

Tabla de Contenidos

NUESTRA OPINIÓN - Conferencias climáticas y agendas políticas.....	2
Plantaciones de palma aceitera en Chiapas, México: mujeres en lucha contra el control territorial y la violencia.....	5
Un diálogo que reflexiona sobre 15 años de REDD como política sobre clima en los bosques.....	11
Las voces de las mujeres que viven alrededor de las plantaciones de palma aceitera de Socfin en Sierra Leona.....	19
Nuevas ciudades capitales, deforestación y apartheid social: paralelos entre Brasil e Indonesia.....	22
Ilusiones de carbono en la Amazonía brasileña.....	29
América del Sur: la destrucción 'verde' de la selva amazónica.....	34
RECOMENDADOS.....	41
- La producción de palma aceitera explota a poblaciones negras e indígenas en Brasil	
- Compañía de aceite de palma, policías y militares atacan masiva y violentamente a pobladores de la República Democrática del Congo	
- Familias de la República del Congo son despojadas de sus tierras para dar paso a un proyecto de compensación del gigante petrolero Total	

Este Boletín cuenta con artículos escritos por las siguientes organizaciones y personas:

La coordinadora de La Red de Mujeres de La Costa en Rebeldía desde Chiapas, México; nueve aliadas y aliados del WRM de diferentes regiones para discutir los impactos dañinos del mecanismo REDD, incluyendo a Acción Ecológica de Ecuador, Censat/Amigos de la Tierra Colombia, el Centro de Recursos Agrarios de Indonesia, Muyissi Environnement de Gabón, la Red Ambiental Indígena (IEN) de Norteamérica y el Corner House del Reino Unido; la coordinadora nacional de la red de defensa de las mujeres WORNAPI desde Sierra Leona; y el Secretariado Internacional del WRM.

NUESTRA OPINIÓN

Conferencias climáticas y agendas políticas

No tiene tanta importancia lo que los gobiernos acuerden (o no acuerden) en las reuniones de la ONU sobre clima para el mundo real del mercado de carbono. Las empresas, los gobiernos, las ONG conservacionistas, las consultorías, los agentes de bolsa, los bancos y muchos otros trabajan con ahínco para establecer programas de mercado de carbono como si se tratara de “el único camino a seguir”.

En las últimas negociaciones climáticas de la ONU, celebradas en noviembre de 2022, la industria de los combustibles fósiles y sus aliados políticos y económicos fracasaron (una vez más) en su ofensiva de presionar a los gobiernos para que adopten normas relativas al comercio de carbono, a pesar de que el [número de cabilderos](#) presentes en las cumbres climáticas sea cada vez mayor.

Estos actores están tan ansiosos por establecer el comercio de carbono como una política climática, ya que les permite tanto a la industria de los combustibles fósiles como a todas las industrias que dependen de ellos, seguir expandiéndose y posiblemente incluso beneficiarse con ello. Los ‘mercados de carbono’ están al centro de numerosos conceptos promovidos actualmente, incluyendo a las compensaciones de carbono, las ‘emisiones netas cero’, los productos ‘neutros en carbono’, las ‘soluciones basadas en la naturaleza’, REDD+ y la ‘deforestación neta cero’.

A pesar de que en las cumbres climáticas de la ONU todavía se sigue cuestionando y debatiendo el verdadero papel de los mercados de carbono en el Acuerdo de París de la ONU, algunos gobiernos están avanzando unilateralmente con el establecimiento de sistemas de mercados de carbono nacionales o subnacionales, acuerdos bilaterales o asociaciones público-privadas para establecer nuevas iniciativas en materia de mercados de carbono. Todo esto, de una forma u otra, crea una mayor demanda de comercio de carbono y allana el camino para depender aún más de los sistemas de mercado de carbono como si se tratara *del único camino a seguir*.

El gobierno de Suiza, por ejemplo, ha establecido tratados bilaterales con Perú, Ghana, Senegal, Georgia, Vanuatu, Dominica, Tailandia, Ucrania, Marruecos, Chile y Uruguay, para alcanzar su objetivo de ‘cero emisiones netas’ para 2050. Estos acuerdos establecen una base legal para los contratos comerciales que garantizan la transferencia de créditos de reducción de emisiones (baratos), dejando que los países del Sur potencialmente financien reducciones de emisiones más costosas para alcanzar sus propios objetivos. (1) Una consultora de carbono explicó cómo estos acuerdos son “importantes laboratorios para el futuro de los mecanismos de mercado”. (2)

Además, en la conferencia climática de la ONU, el enviado de Estados Unidos para el clima, John Kerry, lanzó un plan de compensación voluntaria de carbono con el apoyo del Earth Fund de Jeff Bezos (de la gigante minorista Amazon), de Microsoft, de PepsiCo y del Bank of America. (3)

Las empresas de combustibles fósiles y otras empresas contaminantes también siguen firmando acuerdos con los gobiernos del Sur para comprar grandes cantidades de compensaciones de carbono. En noviembre de 2022, el presidente de Guyana, Irfaan Ali, anunció que la compañía petrolera con sede en Estados Unidos, Hess Corporation, compraría 2,5 millones de compensaciones de carbono anuales desde 2016 hasta 2030. Hess Guyana Exploration tiene una participación del 30 por ciento en el bloque de exploración de petróleo y gas Stabroek, frente a la costa de Guyana. Los créditos de carbono se generan a partir de proyectos REDD en los bosques de Guyana. (4) Todas las principales compañías petroleras están comprando compensaciones de carbono.

Lo que los gobiernos discuten y acuerdan (o no acuerdan) durante las cumbres climáticas de la ONU no tiene tanta trascendencia en el mundo real del mercado de carbono en expansión. Las empresas, los gobiernos, las ONG conservacionistas, las empresas de consultoría, los agentes de bolsa, los bancos y muchos otros actores trabajan con ahínco para establecer esquemas de mercado de carbono como si se tratara del *único camino a seguir*.

Esto es aún peor considerando que las compensaciones de carbono, al tiempo que intensifican la crisis climática, sirven como fachada para la expansión de un acaparamiento violento y racista de las tierras y los bosques de los Pueblos Indígenas y las comunidades campesinas.

Un artículo de este Boletín referido a cuatro proyectos REDD en el municipio de Portel en Brasil, muestra cómo estos proyectos violan los derechos comunitarios, en algunos casos incluso sin que la comunidad lo sepa, y compromete la autodeterminación de las comunidades.

Otro artículo comparte una ronda de discusión organizada por el WRM para reflexionar, conjuntamente con nueve aliados de diferentes regiones, sobre las numerosas y diversas capas de impactos dañinos que el mecanismo REDD ha causado en los últimos 15 años.

Otro artículo, con foco en la región amazónica en particular, explica cómo las ‘soluciones’ que se proponen, incluidos los programas de carbono, la energía renovable, los agrocombustibles, etc., se han convertido en nuevas causas subyacentes de la deforestación. Estos proyectos ‘verdes’ se expanden junto con otros proyectos destructivos que permiten que ‘todo siga como siempre’.

Entre esos proyectos destructivos están las plantaciones de monocultivos industriales. Este Boletín incluye dos contribuciones que destacan las historias y las resistencias de las mujeres que se enfrentan a las plantaciones de palma aceitera en sus territorios: una es un podcast que cuenta la historia de mujeres de Sierra Leona que se enfrentan a las plantaciones de la empresa Socfin; y la segunda es una entrevista a una mujer de ‘La Red de Mujeres de La Costa en Rebeldía’ de Chiapas, México, que enfatiza cómo se enfrentan a este monocultivo facilitado por los contratos que los hombres firman con las empresas.

Y otro artículo reflexiona sobre los planes en curso del gobierno de Indonesia para construir una nueva ciudad capital con el argumento de convertirla en una ciudad ‘verde’ e ‘inteligente’, lo que

Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales (WRM)

ayudaría a Indonesia a alcanzar sus objetivos de 'cero emisiones netas'. El artículo establece paralelismos con la época en que los gobernantes brasileños, hace unos 60 años, decidieron construir una nueva ciudad capital en el centro del país.

Mientras los Pueblos Indígenas y las comunidades campesinas, en particular del Sur global, enfrentan de primera mano los fuertes impactos de la crisis climática, los acuerdos y conferencias de la ONU se han visto inundados, desde el principio, por el interés de mantener en funcionamiento la economía capitalista.

Que nuestra mirada y esfuerzos se dirijan al fortalecimiento de nuestra solidaridad y la elaboración de alianzas horizontales entre y con movimientos de base. (5) Las discusiones deben estar ahí, con quienes de verdad defienden la vida.

(1) Swiss Confederation, Bilateral climate agreements on emission reductions and carbon storage abroad, <https://www.bafu.admin.ch/bafu/en/home/topics/climate/info-specialists/climate--international-affairs/staatsvertraege-umsetzung-klimauebereinkommen-von-paris-artikel6.html>

(2) Argus, Swiss article 6 agreements 'set poor precedent', Noviembre de 2021, <https://www.argusmedia.com/en/news/2269408-swiss-article-6-agreements-set-poor-precedent>

(3) Reuters, U.S. climate envoy Kerry launches carbon offset plan, Noviembre de 2022, <https://www.reuters.com/business/cop/us-climate-envoy-kerry-launches-carbon-offset-plan-2022-11-09/>

(4) REDD-Monitor, Guyana is to sell US\$750 million carbon offsets to Hess Corporation, a US-based oil corporation that is extracting oil in Guyana. The saga of false solutions to the climate crisis continues, Diciembre de 2022, <https://redd-monitor.org/2022/12/05/guyana-is-to-sell-us750-million-carbon-offsets-to-hess-corporation-a-us-based-oil-corporation-that-is-extracting-oil-in-guyana-the-saga-of-false-solutions-to-the-climate-crisis-continues/>

(5) Informe del WRM, Una reflexión crítica sobre la participación en los procesos de política internacional sobre bosques, 2022, https://www.wrm.org.uy/sites/default/files/2022-11/ESP_WRM_briefing_Oct_2022.pdf

Plantaciones de palma aceitera en Chiapas, México: mujeres en lucha contra el control territorial y la violencia

Las plantaciones de palma aceitera son causa central de la deforestación en el sureste mexicano. Una red de mujeres en Chiapas se han organizado para denunciar las tácticas de coerción y engaños por parte del Estado y de las empresas para que los campesinos acepten el monocultivo en sus tierras. Su lucha es por la tierra, por sus conocimientos, y porque sus voces sean escuchadas.

Las plantaciones de palma aceitera se han convertido en uno de los impulsores centrales de la deforestación en el sureste mexicano. Estos monocultivos se vienen imponiendo como una forma de control territorial, trastocando y aprovechándose de formas de organización social existentes y generando violencia, sobretudo para las mujeres y los territorios que defienden. (1)

El estado de Chiapas, al sur de México, según datos de 2019, concentra más del 43 por ciento de las plantaciones de palma aceitera del país. (2) Tan solo en la Región Costa, al sur de Chiapas, existen 27,500 hectáreas sembradas. Estas plantaciones conectan en la región Norte de Chiapas con un ‘corredor’ de plantaciones de palma, que incluye territorios en Guatemala y Honduras. Este corredor fue afianzado con el ‘Proyecto de Integración y Desarrollo de Mesoamérica’, que impulsa el ‘Programa Mesoamericano de Biocombustibles’, el cual busca la reordenación territorial en beneficio de los intereses empresariales y las elites locales. La Región Costa, a su vez, se ha convertido en una gran área de extracción, con proyectos mineros, hidroeléctricos, de mega-infraestructura, gaseoductos y de plantaciones de monocultivos, además de representar una zona de mayor control militar por la migración hacia países del Norte. No es casualidad que las mayores plantaciones de palma se encuentran en esta región, ya que es la más rica en agua en todo México.

En Chiapas hay once procesadoras de aceite de palma crudo, que luego se refina como aceite vegetal en refinerías ubicadas en Veracruz y Jalisco. Cada una de estas plantas fomenta la expansión de la siembra de palmas. Las plantaciones de palma aceitera asimismo están relacionadas con otro megaproyecto de soporte extractivo en la zona en la región de Palenque, al norte de Chiapas: ‘El Tren Maya’, la pieza más visible del llamado ‘Proyecto de Reordenamiento Territorial del Sur-Sureste’, también vinculado al ‘Proyecto de Integración y Desarrollo de Mesoamérica’. Este tren servirá como ruta de extracción de materias primas básicas, entre ellas la palma aceitera.

Frente a esta situación, las mujeres se vienen organizando con fuerza en la región y denuncian las tácticas de coerción y engaños por parte del Estado y de las empresas, para que los campesinos acepten el monocultivo en sus tierras. Entre los impactos mencionan como el espacio dedicado a los huertos y granjas de traspatio se ve cada vez más reducido y contaminado por los agrotóxicos,

la tierra se erosiona, dificultando la producción y los animales no cuentan con agua ni pasto. La alimentación familiar se vuelve cada vez más dependiente de la compra de productos industrializados y procesados, o incluso, la compra de granos básicos como el maíz y el frijol. Para las mujeres esto ha significado, además, un despojo de sus prácticas ancestrales de cuidado y preservación de los territorios, la pérdida de sus conocimientos e historias, de su cultura y de sus formas de organizarse, trabajar, celebrar y alimentarse.

La mayoría de las mujeres no están de acuerdo con la renta de la tierra para el monocultivo, pero como no son titulares de las tierras, sus intereses no son tomados en cuenta. Es así que la lucha de las mujeres por la tierra además se relaciona con su lucha por poder participar y decidir sobre lo que pasa en sus comunidades, sobre qué plantar, cuándo y cómo; y que su voz sea escuchada en igualdad de condiciones.

El gobierno por su parte, bajo el discurso de la protección y control del crimen organizado, ha mandado a la Guardia Nacional, militarizando estos territorios. En consecuencia, las persecuciones, el acoso, el control y la violencia física, sexual y emocional en contra de las mujeres, así como los feminicidios, han aumentado con total impunidad. Además de que esto se exagera con el control que pretenden ejercer grupos del crimen organizado en la región.

Pero las mujeres no se han detenido en su lucha, pues juntas en redes y colectivos se están organizando, informando y capacitando para fortalecer su voz y lucha colectiva.

El WRM conversó con **Guadalupe Núñez Salazar, coordinadora de La Red de Mujeres de La Costa en Rebeldía**, una articulación de cerca de 80 mujeres que pertenecen a varias comunidades de los municipios Costeros de Chiapas en defensa de sus tierras y territorios.

WRM: ¿Nos podría contar cómo recuerda estas tierras antes de la llegada de la palma a la región?

Antes de que hubiera palmeras plantadas, este territorio estaba lleno de árboles frutales, habían ríos muy caudalosos y existía mucha vegetación diversa y animales. Yo recuerdo muy bien este lugar antes de que llegara la palma. Las mujeres tenían variedad de cultivos y podían consumir y producir diversos alimentos, nos podíamos bañar tranquilamente en los ríos y se pescaba también mucho cuando era temporada. El agua era pura y no había que hervirla ni ponerle nada para poder tomarla, como lo tenemos que hacer ahora. En ese entonces se sentía que había más cercanía y contacto con la tierra y sus riquezas, y había mucho que comer, incluyendo a los animalitos del monte. Los pajaritos, por temporadas, llegaban en abundancia en esa época. Eran tierras muy húmedas, siempre lo fueron, pero sabíamos como manejar eso para aprovecharlas.

WRM: ¿Cuándo y cómo llegaron las plantaciones a sus territorios?

La palma aceitera llegó en los años 90s a través de los gobiernos.

En 1998 se dieron inundaciones muy fuertes que provocaron grandes pérdidas para las familias campesinas. Una gran parte de la región se había inundado gravemente. Hay que recordar que el huracán Mitch fue en ese mismo año, y varias provincias quedaron sepultadas, llevándose cultivos, animales y árboles que la gente tenía para sobrevivir.

Es ahí que el gobernador del momento insistía que había que cultivar la palma aceitera para ayudar a secar las tierras y evitar las inundaciones.

En el 2007 el gobierno empieza con una propaganda más fuerte para hacer que la gente plante las palmas en sus tierras. Representantes del gobierno se acercaban a los ejidatarios que tenían tierra, los cuales eran hombres en su gran mayoría, para promover este monocultivo como una forma de hacer negocios, siguiendo con el discurso que la palma ayudaría a evitar las inundaciones que se vivieron en el año '98.

El boom palmero en la región además se impulsa con la promoción de créditos de hasta cinco años para implementar las plantaciones.

Hay que recordar que, por la forma de tenencia de la tierra en México, la posibilidad de que el gobierno o una empresa compre grandes extensiones de tierra es imposible. Las tierras son de propiedad comunal, son ejidos, pero cada uno tiene una parcela individual donde las decisiones sobre su uso son individuales, de cada ejidatario. Por tanto, lo que hacen es ir acaparando la tierra con discursos de que las empresas les van a comprar los frutos de la palma. Eso también está relacionado al uso y control del agua, ya que las plantaciones (y por ende las empresas) terminan utilizando el agua de las tierras campesinas. Entonces, en lugar de comprar la tierra y el agua, las empresas la rentan, por así decirlo. Y ahí es donde empieza el cambio radical en la vegetación y diversidad de los territorios de esta zona.

Entonces los intereses de las empresas se juntaron con los del gobierno, y ambos trabajaban juntos para fomentar la palma. Al principio les regalaban las plantitas a quienes aceptaban los contratos, pero luego las plantas valían 30 o 50 pesos y las empresas mismas las vendían. Les prometían que sus vidas iban a mejorar, que iban a tener mayores ingresos... les vendían que iban a salir de la pobreza.

Pero ahí hay una falsedad, no? Siempre se considera que las personas de las comunidades son pobres, pero nosotras siempre hemos dicho que la pobreza no es precisamente que una tenga 1000 pesos en la bolsa. La riqueza es lo que se tiene ahí en las comunidades. Allí tienen su territa, su agua, su vegetación, ¡y eso es una gran riqueza! A veces no nos damos cuenta y le vendemos esa riqueza al gobierno y a las empresas... ¡nos la están arrebatando! Las personas de las comunidades son usadas y engañadas con la promesa de mucho dinero.

Ahora se ve una cantidad excesiva de palma aceitera en los territorios y mientras más palma hay, el precio de la fruta es menor.

Los contratos en esta región son sobretodo con dos empresas procesadoras: PalmoSur (Palmeras Oleaginosas del Sur S.A.) y Uumbal. Además, hay una cooperativa para el acopio de la fruta impulsada por el gobierno, que es de los propios pequeños productores palmícolas. La cooperativa ha tenido que comprar hasta las pesas para pesar los frutos antes de poder llevarlos a las procesadoras.

WRM: ¿Cómo se creó la Red de Mujeres y cuál ha sido su proceso de lucha?

La Red de Mujeres de La Costa en Rebeldía nace de una organización llamada Consejo Autónomo Regional de la Costa, que tiene como principal lucha el acceso a la energía eléctrica, aunque siempre en relación con lo que sucedía en los territorios por la cantidad de afectaciones ambientales en las comunidades.

Desde 2016 comenzamos a organizarnos como mujeres para que las compañeras que ya estaban en la organización pero que tenían poca participación pudieran sensibilizarse más sobre lo que estaba sucediendo en las comunidades. Un punto importante para nosotras era el concientizar sobre cómo las tierras comunitarias que tenían plantaciones de palma estaban siendo severamente afectadas, y cómo esto afectaba no solo a quienes tienen las plantaciones sino además a toda la comunidad y, en especial, a las mujeres. Esto nos llevó a juntarnos y contactar a las compañeras que tenían palma en sus territorios y vivían sus impactos, para poder aprender más sobre lo que estaba pasando.

Ahora ya sabemos cómo la tierra está agrietada, el agua está amarilla, los ríos están mucho menos caudalosos, algunos pozos de agua huelen a óxido. Vemos cómo se pierden los alimentos nutricionales y diversos, y las plantas medicinales. Después de unos 5 años de haber sembrado palma, se ve que los alimentos ya están contaminados con los agrotóxicos. Se ve como por ejemplo el elote que antes era grande, ahora sale pequeño y con los granos muy esparcidos. La tierra está erosionada y endurecida, dificultando muchísimo que la producción de alimentos funcione... muchas plantas se secan o no dan fruto. La situación del agua es también preocupante, donde se ve directamente la contaminación y cómo se está acabando... ya no hay agua suficiente. Y cuando no hay agua es la mujer la que sufre más, la que tiene que buscárselas como sea para conseguirla. Este compartir nos ayudó para que nos sigamos organizando e incidiendo en la defensa de nuestras tierras y territorios.

Empezamos siendo 5 mujeres en 2016 y ahora somos alrededor de 80 compañeras de 16 comunidades. Alrededor de 10 o 15 mujeres de cada comunidad, las cuales estamos atentas e incidiendo en el trabajo.

La experiencia en el Consejo Autónomo, donde había hombres y mujeres, nos hizo darnos cuenta que era importante crear un espacio solo para mujeres. Había que buscarnos un espacio para poder hablar no solo sobre la contaminación y las afectaciones sobre la tierra y agua, pero también sobre nuestras violaciones de derechos como mujeres. La Red se convirtió en un espacio

necesario para estar juntas, abrazarnos, sentirnos, reflexionar juntas y caminar juntas. Ese sentir nos impulsó a fortalecer esta Red de Mujeres.

Uno de nuestros principales retos en el proceso de mantener este espacio fue el hacernos escuchar para poder agarrar fuerza. Porque si no logramos hablar fuera de nuestros espacios, pues quien nos va a escuchar. Entonces, el espacio es crucial para fortalecernos y poder hablar con convicción. Hay que entender que muchas mujeres son violentadas en sus hogares, y entonces juntas aprendemos a defendernos y conocer los derechos que han sido violentados. Además, el estar trabajando en procesos organizativos de resistencia también implica en muchos casos el confrontamiento con los mismos compañeros. Juntas podemos ver maneras para seguir adelante, para seguir luchando. El poder abrazarnos y llorar juntas nos ayuda a fortalecer nuestra voz colectiva.

El ser mujer pone en perspectiva lo que significa el extractivismo, ¿qué se extrae? Pues nuestras plantas, nuestros conocimientos, nuestra salud. Las mujeres cargan con hacer las marchas, los bloqueos, las comidas y así se van sumando nuestras cargas... Aunque a los recorridos van los compañeros también (risas).

Ahora estamos tratando de concientizar para que quienes tengan palma en sus tierras vayan viendo cómo hacerle para cortar alguna palma cada año para ir volviendo a replantar nuestros propios cultivos.

WRM: ¿Cómo se vive la violencia en los territorios y cuál su defensa contra ello?

Desde que vino la Guardia Nacional se ve su presencia en las comunidades. Según ellos están acá para cuidar, pero lo que se ve es un aumento de los homicidios, los feminicidios, la delincuencia, los desaparecidos... de todo. Esta presencia hace que haya mucho control y creemos nosotras que ellos lo que protegen son los intereses del gobierno y las empresas. Porque nosotras estamos en contra de las plantaciones de palma, pero también estamos en contra de las mineras, de las hidroeléctricas y de las grandes eólicas que el gobierno quiere instalar en esta región. Nosotras estamos incidiendo para decir que somos las mujeres las que vemos los principales impactos y estamos en pie de lucha en defensa de nuestras tierras.

Nosotras, además de ser madres, hijas, esposas, somos defensoras de la vida. La Guardia Nacional ha llegado para quedarse, pero eso no va a impedir que nos organizamos para defender lo nuestro, eso tan preciado que ellos nos quieren arrebatar. Hemos visto que ahora, desde que hay tantos militares en el territorio, hay más asesinatos de mujeres y desapariciones de mujeres jóvenes, así como prostitución. Además, ha incrementado el crimen organizado y eso nos preocupa mucho porque contra eso no sabemos nunca si nos pueden detectar y ya no amanecemos vivas.

Como mujeres, somos parte del territorio y, por tanto, somos las más dañadas cuando los hombres firman estos contratos. Somos la fuerza de defensa de nuestros alimentos, de nuestra agua, de

nuestros conocimientos. A través de estos espacios de mujeres hemos podido sensibilizar a más mujeres y juntarnos en la defensa.

Las mujeres nos tenemos que organizar y defender nuestros derechos y nuestras vidas colectivas que tenemos desde momentos ancestrales. Tenemos que entender y reflexionar juntas en profundidad sobre lo que los gobiernos y las empresas hacen contra el pueblo para tomar acción. Hay que además concientizar a los compañeros para que entiendan que las mujeres tienen la necesidad de esa defensa, de información, de tomar decisiones. Tienen que entender que ellos no pueden ir a reuniones sin nosotras, que no pueden firmar nada sin nosotras. Sigue siendo un proceso largo para que puedan entender que las mujeres no somos objetos, sino que somos sujetos de nuestras propias vidas.

(1) La información de la introducción está basada en el trabajo de investigación de la organización mexicana Agua y Vida, que ha lanzado en 2022 la publicación: Ramos, Guillen Claudia y Schenerock, Angélica, La Palma Aceitera desde la Palabra de las Mujeres. Diagnóstico de la palma aceitera y sus efectos en los territorios de Chiapas, <https://aguayvida.org.mx/wp-content/uploads/2021/08/Mujeres-y-Palma-Aceitera-Diagno%CC%81stico.pdf>

(2) Ramos, Guillén Claudia, La expansión de la Palma Aceitera en el Sureste Mexicano, 2019, <https://materiales.otrosmundoschiapas.org/expansion-de-los-monocultivos-en-elsureste-mexicano-la-palma-aceitera-enchiapas/>

Un diálogo que reflexiona sobre 15 años de REDD como política sobre clima en los bosques

En 2022, el WRM conversó con varias de las autoras y autores de la publicación “15 años de REDD: un mecanismo intrínsecamente corrupto”, junto a otros aliados. El objetivo fue el de reflexionar sobre las diversas capas de impactos dañinos que REDD ha ocasionado desde hace 15 años. Aquí se presenta un resumen de cada intervención.

En noviembre de 2022, el WRM conversó con varias de las autoras y autores de la publicación “15 años de REDD: un mecanismo intrínsecamente corrupto”, junto a otros aliados. El objetivo fue el de reflexionar sobre las diversas capas de impactos dañinos que REDD ha ocasionado desde hace 15 años. Habrá que recordar que REDD se introdujo en las negociaciones sobre clima de la ONU como política dominante sobre bosques, y fue también en la ONU donde se introdujo la lógica de la compensación (los ‘*offsets*’ en inglés). Es decir, esa idea errónea de que la contaminación en un lugar y de un actor en particular puede ser compensada en otro lugar y por otro actor. REDD se basa en esta lógica, lo que le ha permitido a criminales corporativos y estatales que puedan seguir con sus negocios de siempre y obtener una imagen ‘verde’.

Se puede decir mucho sobre los fracasos e impactos que REDD ha llevado a los territorios. Es importante enfatizar sin embargo cómo sus proponentes han repetido continuamente que las comunidades dependientes de los bosques son las culpables de la deforestación, y que REDD sería la salvación para reducir esa deforestación. Un discurso colonialista y racista que facilita la imposición de restricciones y prohibiciones a comunidades y Pueblos Indígenas sobre si pueden o no acceder y utilizar sus bosques y tierras. No obstante, REDD no establece restricciones ni prohibiciones a la industria petrolera, o a las madereras, o a las mega-infraestructuras o a las mineras, o a la industria de plantaciones de árboles que está en constante expansión.

Este artículo presenta un resumen de cada una de las intervenciones durante el conversatorio. Pueden escuchar el evento completo [en este link](#).

WRM a Jutta Kill, integrante del Secretariado del WRM:

¿Por qué argumentas en tu artículo que REDD no ha sido tan solo un fracaso, y por qué aún se habla de REDD en las negociaciones de la ONU?

Jutta Kill: Reducir la deforestación nunca fue la razón o motivación principal para introducir este mecanismo. Entonces, ¿cuáles son esas otras motivaciones de REDD? Identificarlas nos ayudaría a entender porqué, a pesar de los altos niveles de deforestación que se mantienen, REDD y ahora también las llamadas ‘soluciones basadas en la naturaleza’, sigue teniendo un gran espacio en las discusiones sobre clima.

Si solo se mira el fracaso de REDD en reducir la deforestación, no podremos ver quiénes se han beneficiado y dónde *no* ha sido un fracaso. Así, REDD no ha sido un fracaso para la industria petrolera y otras industrias responsables de la crisis climática. Las empresas mineras y petroleras están entre las más beneficiadas con este mecanismo porque, para ellas, REDD ha servido como una distracción que ha imposibilitado el que se discuta, tanto en la ONU como en la sociedad en general, lo que realmente se debería discutir: cómo mantener los combustibles fósiles bajo la tierra. El no poner la atención en el carbono que está atrapado debajo de la tierra es lo que hace muy felices a estas empresas, ya que les permite mantener sus millonarias ganancias provenientes de la extracción de petróleo, gas y carbón. En su lugar, la atención de REDD está en el carbono que está por encima de la superficie terrestre, o sea en los bosques y suelos. Eso es una trampa.

REDD tampoco le falló a la gran industria de la conservación. Estas ONGs han generado inmensas ganancias realizando talleres de capacitación, introduciendo metodologías para medir el carbono (con enormes márgenes de error), entre otros.

Otra razón por la cual REDD no ha sido solo un fracaso es la gran cantidad de programas de ‘carbono neutral’ que están disponibles hoy en día. REDD ha sido crucial en hacernos creer que está bien seguir comprando productos y servicios que de hecho empeoran la crisis climática.

En conclusión, hay muchas personas generando ganancias astronómicas con la industria de los combustibles fósiles, y que usan REDD, y ahora también las llamadas ‘soluciones basadas en la naturaleza’, y el mercado del carbono para distraernos de la necesidad de dejar de extraer petróleo, gas y carbón del subsuelo. Por otro lado, REDD también ha ayudado a que se incremente el acaparamiento de tierras y el control de uso de las tierras de los Pueblos Indígenas y comunidades campesinas.

WRM a Ivonne Yanez, integrante de Acción Ecológica en Ecuador y de la Red Oilwatch en Latinoamérica:

¿Cómo es posible que la industria del petróleo, principal impulsora de la crisis climática, lidere la demanda de la llamada ‘solución’ propuesta por la ONU?

Ivonne Yanez: Desde hace casi 60 años se sabe que la principal causa del calentamiento global son las emisiones provenientes de la extracción y consumo de combustibles fósiles. Y las primeras en saber eso fueron las empresas petroleras. Hay videos de científicos que trabajaban para las petroleras desde hace 50 años que ya hablaban del problema del calentamiento global. Pero sabemos también que el capitalismo, como lo conocemos ahora, necesita de la energía de los combustibles fósiles, como el carbón, el petróleo, el gas. Y justamente estos mecanismos de los que estamos hablando de compensaciones de carbono, como REDD, han sido promovidos falsamente como una solución para enfrentar el cambio climático, a través de toda la institucionalidad de las Naciones Unidas, del sistema financiero internacional, entre otros. Pero en realidad, estos mecanismos fueron creados justamente para seguir con el proceso de extracción y consumo de combustibles fósiles.

Ahora, cuando se habla de la industria petrolera no debemos pensar solamente en Shell, Texaco, Chevron o Eni, sino en un capitalismo fósil. Es decir, en una agricultura industrial altamente consumidora de combustibles fósiles y emisora de otros gases de efecto invernadero. En todo un aparato industrial militar altamente consumidor de combustibles fósiles. Pero también en un sistema financiero que por supuesto depende, en gran parte, del dinero que mueve todo ese aparato industrial militar extractivista relacionado a los combustibles fósiles. Entonces, estos mecanismos de compensación fueron creados por los capitalistas que lo que querían es decir “sabemos cuál es el problema, pero no queremos solucionarlo”.

Asimismo, tenemos que evitar decir que “a pesar de las negociaciones sobre cambio climático” o que “a pesar de estos mecanismos” no se ha solucionado el problema de la crisis climática. Siempre tenemos que referirnos a que “debido a que ocurrió eso”, “debido a esos mecanismos”, “debido al sistema de las Naciones Unidas con toda su infraestructura”, es que las emisiones no se han detenido y continúan expandiéndose.

WRM a Tamra Gilbertson, quien hizo su doctorado sobre las compensaciones de carbono en Colombia.

¿Qué podemos aprender del ‘mecanismo de pago de impuestos al carbono’ en el contexto de Colombia?

Tamra Gilbertson: Casi siempre, cuando las personas buscan supuestas ‘soluciones’ fuera del mercado de carbono, argumentan que hay que establecer impuestos al carbono. Pero cuando miramos a profundidad los impuestos al carbono y otros esquemas similares alrededor del mundo, descubrimos que los países que tienen impuestos sobre los combustibles fósiles o sobre las emisiones generadas u otros similares, no han logrado reducir la extracción. Los impuestos no hacen que los combustibles fósiles se queden bajo tierra. Así que un impuesto al carbono no va a detener el cambio climático, ni hará que los contaminadores se detengan. Por otro lado, hemos visto como las empresas saben perfectamente cómo hacer para no pagar impuestos y, por ello, terminan afectando a los consumidores o a los salarios de los trabajadores.

Los impuestos por tanto no han sido creados para impedir la acumulación capitalista, sino por el contrario, para permitirle seguir.

Otro punto es que estos impuestos acaban siendo un primer paso para que los países establezcan mercados de carbono domésticos. En el caso de Colombia, el programa de impuestos termina siendo un inventario de las emisiones del país. Y se creó de tal manera que solo ciertos tipos de contaminación que se producen dentro de Colombia debían de pagar un determinado porcentaje de impuestos. Recordemos que las minas de carbón a cielo abierto más grandes del hemisferio occidental están en Colombia, generando impactos tremendos en la población afrocolombiana y los Pueblos Indígenas.

Cuando se establece el impuesto al carbono, no se establece sobre el carbón que de hecho está siendo extraído, porque el 98 por ciento de ese carbón se exporta principalmente a Europa. El impuesto se establece sobre las emisiones generadas por las maquinarias utilizadas para extraer el

carbón. Las empresas por su parte lograron que en lugar de pagar ese impuesto, pudieran utilizar otros mecanismos, en los que se incluye REDD. Grandes agencias donantes como USAID y ONGs de conservación se sentaron a la mesa para escribir esas leyes. Y lo que ocurrió es que la industria del carbono sigue sin pagar los impuestos al carbono, mientras que a su vez crea un impacto muy fuerte, acompañado de mucha violencia, en dos lados: en los territorios de extracción y en los territorios utilizados para la supuesta compensación.

WRM a Diego Cardona, integrante de Censat/Amigos de la Tierra, Colombia:

¿Cuáles son los retos frente a que el presidente (de izquierda) de Colombia presente a la Economía Verde como su agenda política sobre medio ambiente y cambio climático?

Diego Cardona: Para responder la pregunta quisiera compartir un comunicado del 2019 que hace la autoridad ambiental de la Amazonía colombiana, Corpoamazonía, por el cual advierte a Pueblos Indígenas y comunidades locales acerca de ONGs, cooperativas o empresas que están en los territorios gestionando proyectos de compra o venta de bonos de carbono. Es decir, proyectos tipo REDD - que sabemos han cambiado muchísimo de nombres después de todos los escándalos. Lo que en resumen dice la última línea del comunicado es que: “recomendamos a las comunidades rurales que se abstengan de entregar documentos, dinero u otra información solicitada por dichas organizaciones...” Y bueno, han pasado varios años desde entonces y la advertencia sigue siendo la misma. Las comunidades siguen siendo engañadas.

El número de proyectos de carbono ha crecido enormemente en el país; cientos de contratos sobre millones de hectáreas con proyectos de este tipo se siguen firmando continuamente. Y las estrategias son las mismas: se cooptan a algunos líderes comunitarios –siempre con uno o pocos hombres de la comunidad, nunca una mujer; se firma un contrato con esa(s) persona(s); y se crea la división y, algo muy fundamental, la desterritorialización. Es decir, que la gente tenga que salir de su territorio, que no pueda usarlo, que no pueda hacer agricultura, que no pueda tumar un árbol para hacer una casa. De hecho, que no pueda vivir allí.

¿Qué riesgos específicamente hay en este momento político del país? Primordialmente que se cambie la agenda y las prioridades de los movimientos sociales. Es decir, este gobierno tiene un gran aval social y político desde los movimientos, Pueblos Indígenas, afrodescendientes, campesinos, que respaldaron su propuesta. Pero la propuesta es muy fuerte sobre la venta de bonos de carbono, más que el gobierno anterior, contra el cual estuvimos haciendo muchísima resistencia. Pero ahora es más problemático, porque un gobierno que se presenta como progresista es el que está proponiendo lo que hemos resistido por décadas. Y con el agravante de que existe un escaso análisis crítico, y las grandes ONG presentándolo como algo bueno.

WRM a Tom Goldtooth, director de la Red Ambiental Indígena (IEN en inglés), de América del Norte:

¿Por qué el uso de cierto lenguaje (como los programas de distribución de beneficios, sistemas de certificación, salvaguardas, etc.) afecta la unidad de los Pueblos Indígenas y cómo podemos fortalecer la solidaridad?

Tom Goldtooth: Ese es un tema muy importante, sobretodo porque muchos aliados e incluso ONGs conservacionistas dicen estar confundidos. Se confunden porque cuando nuestra Red Ambiental Indígena y otras redes del Sur global hacemos intervenciones, por ejemplo en la ONU, rechazamos los mercados de carbono, la geoingeniería y otras ‘soluciones’ técnicas, y los mecanismos de financiación climática.

Cuando nos preguntan por qué nos oponemos, contestamos que todo eso es parte de un sistema falso. La única estrategia en los corredores de las negociaciones sobre clima de la ONU está asentada en una adaptación, una mitigación y un financiamiento basado en falsas soluciones. Han invertido mucho en eso. Por ejemplo, hemos tenido que lidiar con el Banco Mundial, que designa millones de dólares para organizaciones indígenas intermediarias en el Sur global. Eso nos ha dificultado mucho el poder informar a comunidades de base en los bosques, porque ya han sido convencidas de que participar en REDD+ (así como en las llamadas ‘Soluciones basadas en la naturaleza’) trae dinero y creen que fortalece sus luchas al prometerles un título de propiedad sobre sus tierras.

Siendo nosotros una organización indígena pequeña que confronta a estos actores, ¿cómo desarrollamos una estrategia para alertar a Pueblos Indígenas y a comunidades locales sobre la verdad de estas falsas soluciones? Estamos en la ONU en un centro de convenciones grande, con muchas personas que están encargadas de capacitar a nuestras comunidades. Entonces ese es un gran reto. El dueño de Amazon, Jeff Bezos, creó un fondo gigantesco en los Estados Unidos y pasó millones de dólares a algunas de las ONGs que más promueven REDD y las ‘Soluciones basadas en la naturaleza’. Las comunidades están siendo presionadas para firmar contratos por 90 años, diciéndoles que van a tener beneficios, con ese lenguaje de ‘compartir beneficios’. Y mientras tanto, nosotros tratamos de luchar para hacer una contra-narrativa.

Los promotores de REDD y del mercado de carbono necesitan a los Pueblos Indígenas y a las comunidades dependientes de los bosques. Ahora están invirtiendo para atraer a quienes ellos llaman de ‘poseedores del saber’ (*knowledge holders*). Son esfuerzos de cooptación de nuestros Pueblos Indígenas y comunidades para crear división. Hay algunos hermanos indígenas a los que se les está prometiendo miles de dólares, y está pasando lo mismo en Norteamérica. Cuando se habla de ‘salvaguardas’, tenemos que saber que no hay ninguna garantía ni consecuencia legal si un estado nacional viola esas salvaguardas.

Entonces ¿cómo podemos construir solidaridad? Ése es un punto central. Tenemos que tener muchísimo cuidado con el lenguaje, porque lo utilizan para crear confusiones entre nosotros. Hay a quienes conozco de muchos años en la lucha por los derechos de los Pueblos Indígenas, y ellos mismos nos están dividiendo. Las estrategias de las súper ONGs conservacionistas, las instituciones financieras, las empresas, los gobiernos, nos están dividiendo. No se preocupan por nosotros. Lo único que quieren es implementar sus esquemas de mercado. Han cooptado incluso nuestra narrativa. Hablan de la reconexión de la gente con la naturaleza, de la armonía con la naturaleza, del desarrollo ecológico, ‘holístico’, del ‘buen vivir’. ¡Manipulan los términos! Y

nuestros aliados no-indígenas también están siendo divididos. Hay que estar muy atentos. Tenemos que desarrollar estrategias de solidaridad frente a esto y lograr mantenerlas.

WRM to Izzudin Prawiranegara, del Centro de Recursos Agrarios en Indonesia:

Según la experiencia de la comunidad junto al área del proyecto REDD de Katingan, Indonesia, ¿Cómo afecta la certificación de un proyecto REDD a las comunidades?

Izzudin Prawiranegara: El área del proyecto REDD de Katingan es de 300.000 hectáreas, lo que incluye a 20 pueblos en la región central de Katingan. La principal meta del proyecto es controlar a las personas, e incluso detener a quienes salen del área con productos del bosque. Eso evidentemente es una gran carga para la población.

Desde la última década, en Indonesia, hay mucha inversión para fortalecer a las fuerzas del orden que cometen los llamados crímenes ambientales, en su mayoría en territorios de los pueblos del bosque. Las personas que plantaban arroz, por ejemplo, y que utilizaban desde hace cientos de años varios lotes para su agricultura de rotación con las quemadas, ahora ya no lo pueden hacer. Si abren un área para el cultivo ahora, hay una amenaza de multa de US100.000 dólares y la posibilidad de ir a la cárcel por 20 años. Por eso, los agricultores dependen cada vez más de los agroquímicos, para lo que necesitan más dinero. En consecuencia, muchos deben abandonar sus tierras, y cuando la tierra queda abandonada, los incendios aparecen con mucha más facilidad. El incremento en el costo de cultivar arroz obliga a la gente a entrar a las áreas de bosque para tratar de obtener algo o pescar algo, pero se exponen a las sanciones.

Entonces, hemos visto como los capitalistas, con el proyecto REDD, están controlando grandes extensiones de tierra y crean las condiciones por las cuales la tierra se está degradando; es más difícil para la gente ahora el poder cultivar arroz en esas áreas. Es decir, el proyecto REDD ha hecho que las personas del área se vuelvan cada vez más marginadas, ya que han tenido que cambiar sus formas tradicionales de cultivo y utilizar cada vez más agroquímicos. La gente está siendo identificada cada vez más como una amenaza e incluso como un *commodity*.

El proyecto introdujo la certificación CCB, la cual calcula los beneficios agregados en términos de carbono según la intervención del proyecto REDD en los medios de subsistencia de los pueblos que viven en y alrededor del proyecto. Es decir, calcular el carbono evitado al cambiar las prácticas locales. Para el proyecto, la gente local es una amenaza. Está mercantilizando a las personas al introducir sus medios de vida dentro de la contabilidad del carbono, como parte de los requisitos para que obtenga la certificación. Y al tener la certificación, los créditos de carbono pueden venderse por mucho más dinero.

WRM a Ladislas Désiré Ndembet, integrante de la organización Muyissi Environnement, en Gabón:

¿Cómo el proyecto de Grande Mayumba, un área protegida de un millón de hectáreas que incluye además una concesión maderera, impacta a las comunidades?

Ladislav Désiré Ndembet: En Gabón, el proyecto REDD Gran Mayumba no utiliza la palabra REDD en ningún momento. Sus promotores hablan del turismo, de la explotación de los bosques, de la agroindustria, de las ‘Soluciones basadas en la naturaleza’, pero REDD no se pronuncia. El parque nacional Mayumba en Gabón, creado en 1992, junto a otros 13 parques nacionales, ocupan 11 por ciento del territorio de la región. Mayumba tiene 5000 habitantes, incluyendo a Pueblos Indígenas que vienen de países vecinos de África del Oeste, que ejercen comercio en la zona.

20 años después de la creación del parque marítimo Mayumba, las comunidades sienten una desilusión absoluta porque ya no pueden aprovechar las riquezas de sus lagunas y del océano Atlántico. Los campesinos y pescadores sufren distintas restricciones, incluyendo la prohibición de pesca. Esto es un verdadero ataque a la soberanía alimentaria. Yo vengo de esa comunidad y yo crecí consumiendo ostras constantemente, lo cual hoy ya no es posible debido a la fuerte política conservacionista.

Las tierras han sido concedidas a los promotores del carbono. Y el parque nacional que anunciaba sacar a las poblaciones del subdesarrollo a través del ecoturismo, terminó sumergiéndolas en una precariedad total. En Gabón, la tierra pertenece al Estado y el Estado está embarrado de corrupción, por lo que este mecanismo es utilizado para la apropiación ilegal de tierras, incrementando áreas protegidas. Las comunidades, como resultado, están acordonadas por la política de conservación. El gobierno prioriza las alianzas público-privadas, las cuales terminan generando más despojo para los pueblos.

El gobierno de Gabón está defendiendo con fuerza estas falsas soluciones, tratando de conseguir más financiación para ello. Hay que recordar que Noruega le ha prometido al gobierno de Gabón US\$ 150 millones, y empezó a otorgarle dinero desde 2021 bajo la forma de compensaciones de carbono. Es una situación muy difícil. Tenemos que denunciar estas situaciones y multiplicar estos diálogos. Tenemos que desenmascarar estas falsas soluciones y hacer que desaparezcan.

WRM a Larry Lohmann, integrante del grupo de investigación CornerHouse en el Reino Unido:
¿Por qué afirmas en tu artículo que “REDD funciona mejor cuando es más colonialista” y cómo ha logrado REDD sobrevivir por tantos años?

Larry Lohmann: REDD siempre ha estado acechado por su propio colonialismo. Recuerdo cuando hace más de 20 años, en las negociaciones de la ONU, un delegado africano se indignó con la idea de que la tierra y los bosques del Sur global tuvieran que absorber la contaminación del Norte industrializado. A pesar de las muchas reformas hechas, REDD nunca podrá superar este estigma colonialista. Esto es porque la lógica económica de REDD es hacer que el seguir con los negocios de siempre sea más barato para las grandes empresas que el cambiar algo.

El Sur global nunca ganará mucho dinero con REDD, porque eso iría contra su propio propósito. Pero el colonialismo de REDD es mucho más profundo que la apropiación de tierras. De hecho, cada vez que se intenta reformar REDD, se vuelve más colonialista. ¿Porqué? Por que para poder continuar con la quema de combustibles fósiles, los compradores de créditos de REDD tienen que

afirmar que son ellos quienes están salvando los bosques con su dinero. Ellos son quienes deben llevarse el crédito, literalmente, por hacer la diferencia entre 'bosques' y 'no bosques'. Pero eso significa que deben asegurarse por completo que nadie más se lleve el crédito por salvar esa área de bosques. Si las empresas que contabilizan el carbono en los proyectos REDD quieren mantener sus empleos, necesitan probar que sin los proyectos REDD, nadie más podría salvar los bosques; ni las comunidades dependientes de los bosques, ni los movimientos sociales, ni los gobiernos locales, nadie.

Los contadores del carbono en los proyectos de REDD están obligados a ignorar muchas cosas buenas que podrían estar sucediendo sin REDD. Eso significa que deben mantener una actitud colonialista: "esas personas del Sur global no pueden hacer esto, solo yo puedo hacerlo." Este es un requisito en la contabilidad del carbono.

Se pone peor. Los contadores del carbono además tienen que mostrarles a los compradores cuántos créditos van a recibir exactamente, porque solo así estos pueden cuantificar cuánto combustible fósil van a poder quemar tras haber comprado estos créditos. Entonces, las comunidades dependientes de los bosques y otros actores en el Sur global no solo deben ser mostradas como incapaces de actuar constructivamente sin el dinero de REDD, sino que además tienen que ser mostradas como estadísticamente previsibles en términos de saber qué es lo que harían sin el dinero de REDD. Solo puede haber una 'línea base' para un proyecto REDD y esa 'línea base' debe ser cuantificable.

Muchos críticos piensan que el problema de REDD es que los pronósticos sobre lo que sucedería sin un proyecto REDD no son lo suficientemente precisos. Pero la única opción para hacerlos más precisos es intentar hacer a las personas del Sur global más predecibles y más pasivas; y la única manera de lograr eso es reforzando una y otra vez el mito colonial que las poblaciones nativas son menos que los animales: sin iniciativa, sin voluntad propia y libre, sin un futuro al que puedan llamar suyo, sin un futuro que ellos puedan construir por sí mismos.

Por ello, el colonialismo de REDD no solo es la apropiación de tierras. El colonialismo es además la contabilidad técnica y matemática del carbono. Y mientras más precisa se trate de hacer esa contabilidad, más colonialista se va a convertir. REDD sobrevive en parte porque los críticos que piden 'líneas de base' más precisas no se dan cuenta que al hacer esto también están pidiendo más colonialismo.

Las voces de las mujeres que viven alrededor de las plantaciones de palma aceitera de Socfin en Sierra Leona

La empresa de plantaciones de palma aceitera Socfin ha traído violencia y opresión a varios países africanos. Sierra Leona no es una excepción. En colaboración con Aminata Finda Massaquoi, periodista y coordinadora nacional de la red de defensa de las mujeres WORNAPI, el WRM está lanzando un podcast para enfatizar las voces de las mujeres que viven con los impactos de las plantaciones industriales.

El nombre Socfin ha sido sinónimo de violencia y opresión en varios países de África occidental y central, donde la empresa tiene plantaciones industriales de palma aceitera. Sierra Leona no es una excepción. En colaboración con Aminata Finda Massaquoi, periodista y coordinadora nacional de la red de defensa de las mujeres WORNAPI, el WRM está lanzando un podcast para resaltar los diferentes niveles de opresión que enfrentan las mujeres una vez que las plantaciones industriales invaden sus territorios.

Accede y escucha el podcast en inglés aquí: <https://youtu.be/45qUTeAZ8H0>

“Trabajan la tierra y por lo tanto deben tener libertad para usar y decidir sobre la tierra”

La palma aceitera es un cultivo tradicional para numerosas comunidades en Sierra Leona y en toda África occidental. Aminata Finda Massaquoi explica cómo “El aceite de palma es una parte vital de los alimentos que comemos todos los días. Tiene profundos beneficios culturales y es el pilar de nuestra economía tradicional, impulsada principalmente por mujeres rurales. Mientras que los hombres suelen cultivar y cosechar la fruta, las mujeres aportan la mayor parte del trabajo necesario para extraer el aceite. Eso les da mucho prestigio social y beneficios económicos”.

Aminata ha estado trabajando y defendiendo los derechos de las mujeres rurales durante largos años: “He escuchado sus reclamaciones y he visto las realidades de la mayoría de ellas en el terreno”. “Trabajan la tierra para producir alimentos y por lo tanto deben tener libertad para usar y decidir sobre la tierra”, explica.

El Cacicazgo de Malen, en el distrito de Pujehun en el sur de Sierra Leona, es uno de los distritos productores de aceite de palma más grandes del país. Es una zona que fue gravemente afectada por la guerra civil transcurrida entre 1991 y 2002. Sin embargo, la importancia de este cultivo para las mujeres y la economía local corre peligro. ¿Por qué? Se trata de la multinacional Socfin, filial del Grupo Socfin con sede en Luxemburgo. La llegada de la empresa significó que los monocultivos industriales desplazarán la producción tradicional de aceite de palma a tierras marginales, dejando tras de sí un rastro de destrucción y devastación para las comunidades, y en particular para las mujeres y las niñas que viven en y alrededor de estas plantaciones.

Aminata nos recuerda cómo, cuando las empresas llegan a las comunidades, sus representantes se relacionan con los hombres y excluyen a las mujeres de las negociaciones. Aunque, como ella dice, “Al final, son las mujeres y sus hijos quienes más sufren. Además de perder las tierras de cultivo, las mujeres también pierden sus pequeñas plantaciones que les garantizan una fuente regular de ingresos”.

Con el objetivo de aprender de las mujeres más afectadas por la llegada de la empresa a esta zona, Aminata viaja al Cacicazgo de Malen. Ella cuenta cómo el paisaje biodiverso cambia radicalmente en esta zona, con hectáreas y hectáreas de palma aceitera a ambos lados del camino. En 10 años, los bosques y las tierras fértiles del Cacicazgo de Malen se han transformado en miles de hectáreas de monocultivos de palma aceitera.

Aminata explica que en 2011 Socfin firmó un contrato de arrendamiento de tierras por 50 años con el gobierno de Sierra Leona y la autoridad local del Cacicazgo, la cual entregó más de 18.000 hectáreas de tierra a la empresa, y eso es casi el 70 por ciento de la superficie total del Cacicazgo.

El acuerdo ha generado más de una década de violencia y división en el Cacicazgo de Malen, y los residentes locales dicen que no fueron consultados adecuadamente ni compensados por sus tierras. También denuncian que Socfin no ha cumplido sus promesas de construir escuelas, carreteras y hospitales ni ha otorgado becas.

Mamie Sannoh es la primera de las mujeres con las que habla Aminata. Originaria del pueblo de Jumbu Malen, una pequeña comunidad en la carretera principal que conduce al pueblo de Sahn Malen, Sannoh tiene cinco hijos y cinco nietos que cuidar. Arrendó su tierra a Socfin en 2011 y dice que, a cambio, solo recibió una pequeña cantidad de dinero. Mamie Sannoh dice: “Solíamos cultivar maníes y pimientos y procesar nuestro propio aceite de palma, pero ahora tenemos que comprar todas esas cosas. Cuando tenía mi tierra, obtenía frutos de palma de mi huerto, los procesaba, extraía el aceite de palma y lo vendía. Ahora no tenemos tierra, y no tenemos dinero.” Preocupada por la falta de comida para sus hijos, dice: “Ahora me arrepiento. Si todavía tuviera mi tierra podría cultivar muchas cosas y sobrevivir, pero ahora no puedo hacer eso. ¿Cómo voy a hacer para sobrevivir?”

No todos en este Cacicazgo aceptaron arrendar sus tierras a Socfin, pero incluso esas familias se han visto perjudicadas. Aminata habló con Mariatu Kambo, de Jumbu Malen, en la sección Kemoh. Mariatu explica “Aquí tengo una pequeña plantación de palma aceitera, pero no puedo trabajarla porque la empresa no lo permite. No puedo hacer nada. Puedo cosechar mis frutos de palma aceitera pero no puedo procesarlos. Apenas nos ven por aquí, los hombres de seguridad vienen y nos acusan de robar la fruta de palma de la empresa. Incluso conseguir aceite de palma para cocinar es difícil para nosotras ahora. No podemos hacer nada.”

Desde la llegada de la empresa, las comunidades, y en especial las mujeres, han enfrentado incidentes violentos, criminalización y acoso. También surgió una fuerte resistencia, en su

mayoría liderada por mujeres. Una resistencia que dice unánimemente: hay que devolver las tierras a quienes tradicionalmente las han cuidado.

Aminata también habló con Aminata Fabba, Vicepresidenta de la Asociación de Propietarios y Usuarios de Tierras de Malen (MALOA), quien dijo: “Somos como herramientas a merced de la empresa y del jefe supremo. El jefe supremo nos hace lo que la empresa quiere y todos ignoran nuestras preocupaciones”. Fabba dice que las mujeres de Malen quieren que se renegocie el acuerdo de tierras con Socfin... o que la gente recupere sus tierras.

Nuevas ciudades capitales, deforestación y apartheid social: paralelos entre Brasil e Indonesia

[Puede acceder al artículo en Bahasa Indonesia](#)

Los gobernantes de Brasil e Indonesia decidieron en algún momento construir una nueva ciudad capital. Mientras que los gobernantes de Brasil construyeron Brasilia hace unos 60 años, la construcción de la nueva capital de Indonesia está en marcha. Ambos proyectos refuerzan un Estado colonial, pero también revelan el papel de las luchas sociales como forma de revertir una historia de colonialismo.

A pesar de los 17.000 kilómetros que separan a Brasil de Indonesia, ambos países guardan mucho en común, como tener algunos de los bosques tropicales remanentes más grandes del mundo. También comparten una similitud particular: en algún momento, durante la era poscolonial, a sus gobernantes se les ocurrió la idea de construir una nueva ciudad capital. Si bien los gobernantes de Brasil pusieron en práctica la idea hace unos 60 años al construir la capital actual, Brasilia, la construcción de la nueva capital de Indonesia está ahora en marcha. En 2019, el parlamento nacional de Indonesia comenzó a poner en práctica la idea al aprobar su construcción en Kalimantan. ¿Qué paralelismos se pueden establecer entre ambos proyectos y, lo que es más importante, qué lecciones se pueden aprender para las luchas sociales de Indonesia y Brasil?

Una nueva capital: el engañoso argumento de romper con el colonialismo

En Brasil, la idea de construir una nueva capital es tan antigua como su independencia de Portugal, en 1822. Las élites poscoloniales argumentaron, entre otras cosas, que Río de Janeiro, que era la capital desde 1763, era un símbolo de la influencia de los colonizadores y que una nueva capital marcaría una ruptura con este pasado colonial. También argumentaron que establecer la capital en el centro del país fortalecería la unidad nacional y traería progreso y desarrollo a toda una nación, donde la mayoría vivía a lo largo de la costa. Las disputas entre las élites acerca de dónde establecer la nueva capital dieron como resultado que Brasilia se construyera recién en la década de 1950, bajo la presidencia de Juscelino Kubitschek. (1)

Indonesia, por su parte, se independizó de los Países Bajos en 1945. Desde entonces, varios presidentes expresaron su deseo de construir una nueva ciudad capital, lejos de Yakarta. En 2019, bajo la presidencia de Jokowi-Ma'ruf Amin, el parlamento nacional aprobó un proyecto de ley para reubicar la capital del Estado (*Ibu Kota Nusantara* – IKN) y construirla en Kalimantan Oriental. Las obras de infraestructura ya comenzaron. Los argumentos utilizados por el gobierno de Jokowi muestran paralelismos con el discurso de los gobernantes brasileños: Indonesia debería tener una nueva capital como parte de su propia historia nueva e independiente. Y como se argumentó con Brasilia, la idea de trasladar la capital de Indonesia a Kalimantan Oriental, en el

centro del archipiélago, traería aún más desarrollo a todo el país, (2) ya que la mayor parte de su población y de las actividades económicas se concentran actualmente en la isla de Java, donde se encuentra Yakarta.

Deforestación y energía

En el caso de Brasilia, se destruyó el 73 por ciento de la sabana existente -*cerrado*, en portugués- para dar lugar al establecimiento de la nueva capital, lo que implicó la construcción de edificios gubernamentales, zonas de negocios, residenciales y comerciales, así como la necesaria infraestructura para el transporte. La nueva ciudad capital, sin embargo, desencadenó un proceso de deforestación de gran alcance que continúa hasta hoy en día. La construcción de carreteras para conectar a Brasilia con los diferentes Estados de la federación jugó un papel crucial en este proceso. Una de las primeras carreteras que se construyó fue la Transbrasiliana, que conecta a Brasilia con la ciudad amazónica de Belém, capital del Estado de Pará (3). Además de la destrucción de una importante superficie de bosque para construir esta carretera de 2.000 km, su construcción también abrió la parte oriental de la región amazónica, exponiendo a las comunidades, en particular a los Pueblos Indígenas, y a sus territorios a diferentes formas de violencia y actividades destructivas, en especial la extracción de madera, la ganadería, las plantaciones de soja y de otros monocultivos, las actividades mineras y la construcción de represas hidroeléctricas.

Esas represas, responsables de inundar y, por lo tanto, de destruir extensas zonas de bosque, son la columna vertebral del suministro de energía de Brasilia. La represa de Itaipú, la segunda más grande del mundo en términos de producción de energía eléctrica, asegura el 20 por ciento de su suministro, mientras que el 80 por ciento restante es abastecido por el sistema FURNAS, que también se basa en grandes represas hidroeléctricas.

Indonesia ha iniciado el proyecto de su nueva capital en un contexto muy diferente a cuando se construyó Brasilia. Desde entonces, la masiva deforestación en todos los continentes ha reducido significativamente el área de bosques (tropicales). En las últimas décadas, los gobernantes de Indonesia, junto a sus élites e inversores así como instituciones financieras internacionales como el Banco Mundial, han fomentado activamente la destrucción de los bosques en nombre del 'desarrollo', en particular en Kalimantan y Sumatra. A esto se agrega que cada año, la crisis climática también genera impactos más graves en los territorios. Frente a la crisis climática, las élites globales, las empresas y las instituciones financieras básicamente reinventaron la economía capitalista dependiente de los combustibles fósiles para presentarla como la llamada economía 'verde' o 'baja en carbono'. Pero detrás de la nueva imagen reluciente de la economía 'verde' se esconde una lógica de expansión capitalista y una mayor explotación de los bosques, sus pueblos y sus territorios, con el objetivo de aumentar las ganancias de las empresas y los beneficios de las élites. A pesar de que los combustibles fósiles son el principal causante de la crisis climática, es dentro de este marco capitalista que las empresas y los gobiernos formulan la mayoría de las políticas y compromisos relacionados con el clima y los bosques.

Esto ayuda a explicar por qué el gobierno de Indonesia promociona su nueva capital como una ciudad ‘inteligente, verde y forestal’. El gobierno argumenta que la nueva ciudad capital (IKN) es parte de la solución a la crisis climática mundial y que ayudará a Indonesia a lograr su objetivo de ‘cero emisiones netas’, utilizando energía renovable para su demanda de electricidad y un sistema de transporte eléctrico a batería. (4)

Sin embargo, las 256.000 hectáreas supuestamente necesarias para construir la nueva ciudad capital, que es seis veces el tamaño de la actual capital Yakarta, abarcan zonas de bosque que serán destruidas. Además, el suministro de electricidad ‘renovable’ provendrá de la mayor central hidroeléctrica (PLTA, en bahasa indonesio) del sudeste asiático, aún por construirse, que será alimentada por cinco represas instaladas en el río Kayan, distrito de Peso, Regencia Bulungan, en Kalimantan Norte. Según la ONG activista indonesia JATAM, de Kalimantan Oriental: “Seis pueblos ubicados a orillas del río Kayan sufrirán los impactos de este proyecto hidroeléctrico: Long Lejuh, Long Peso, Long Bia y Long Pelban, así como sitios arqueológicos en los pueblos de Long Pelban, Muara Pangiang y Long Lian. Habrá dos pueblos que serán reubicados o desalojados: los pueblos de Long Pelban y Long Lejuh. Hay sitios importantes para la comunidad indígena Bulungan y tumbas sagradas (Salung) en los pueblos de Muara Pangean, Long Lejuh, Long Pelban y Long Lian, que confrontan las mismas amenazas. También están en riesgo el sitio de patrimonio histórico ‘Lahai Bara’ en Bulungan y una tumba o lugar sagrado en el pueblo de Long Pelban”. (5)

Por otro lado, la construcción de la nueva ciudad capital propiciará una mayor expansión de industrias extractivas destructivas. Además de arena y karst, se necesita bloques de piedra para la infraestructura de la nueva capital, lo que aumenta la destrucción creada por este tipo de minería en Sulawesi occidental y central. Varias islas y sus pueblos en el lado este del archipiélago también sufrirán la devastación derivada de la extracción de níquel, una de las principales materias primas de la producción de baterías para vehículos eléctricos. Es importante señalar que estas fundiciones de níquel en Indonesia funcionan con centrales eléctricas de carbón (PLTU, en bahasa indonesio). (6)

Apartheid social

Cuando el gobierno de Kubitschek comenzó a construir la ciudad de Brasilia, impulsó con fuerza el argumento de que la nueva capital representaba una tierra de sueños y oportunidades. Propagaba la idea de que todas las personas, independientemente de la clase en la que nacieran, compartirían el mismo espacio. Así, cumplir el sueño de una nueva capital significaría también cumplir el sueño de una nueva sociedad igualitaria.

Nada estuvo más lejos de la verdad. Para empezar, la construcción de Brasilia destruyó y redujo los territorios y la vegetación de la sabana (*cerrado*), del que dependían para su supervivencia las comunidades *quilombolas* y los Pueblos Indígenas, que han ocupado la región desde tiempos inmemoriales. Nueve años después de la inauguración de la capital, cerca de 79.000 personas vivían en 14.600 tiendas de campaña alrededor de Brasilia. En un intento por detener la migración

de más trabajadores atraídos por las supuestas oportunidades que les ofrecería Brasilia, el gobierno comenzó a sacar a la gente de estos campamentos y a instalarla en una zona que luego se convirtió en una nueva unidad administrativa llamada Ceilândia. Éste fue un proceso comparable a las prácticas de segregación racial del régimen del apartheid de Sudáfrica.

Actualmente, comparada con las 26 capitales de los otros Estados brasileños, Brasilia es la más desigual. En 2018, los habitantes de 'Lago Sul', un barrio elegante lleno de mansiones, atracciones turísticas y restaurantes caros, disfrutaban de una renta media de 7.654,91 Reales brasileños. Mientras tanto, en el barrio 'Estrutural', a sólo 15 km de distancia de 'Lago Sul', la renta media era de 485,97 Reales, lo que significa casi 16 veces menos que en 'Lago Sul'. A diferencia de 'Lago Sul', para la gente de 'Estrutural' el día a día implica una lucha por la supervivencia. Con medios de transporte deficientes y costosos para llegar a sus lugares de trabajo, enfrentan todo tipo de problemas para satisfacer sus necesidades básicas, como alimentos a precios accesibles, acceso al agua, a energía, saneamiento, servicios de salud, etc. (7)

Aunque aún se encuentra en su fase inicial, la construcción de la nueva capital de Indonesia en Kalimantan parece seguir un curso similar. Está destruyendo y reduciendo los espacios de vida del Pueblo Indígena Balik y otras comunidades de la zona, en particular las que habitan en el llamado Anillo 1, la zona más importante de la nueva capital, reservada para altos funcionarios gubernamentales y otras élites. El Anillo 2 y el Anillo 3 estarán destinados al comercio y a la industria respectivamente, y a los barrios residenciales. Hasta ahora, en lo que será el Anillo 1, las mujeres indígenas Balik, cuyas vidas y medios de subsistencia están entrelazados con el río Sepaku, se han visto especialmente afectadas por las obras de construcción iniciales. Se destruyeron campos, huertos y tumbas ancestrales. Su conocimiento ancestral de los techos de nipa tejida está condenado a desaparecer por la destrucción de las zonas donde crece dicha palma, si continúa el proyecto de establecer represas en los ríos para atender el futuro abastecimiento de agua de la ciudad capital. (8)

¿Quién paga la cuenta?

La única cifra oficial que indica cuánto costó la construcción de Brasilia fue una estimación realizada en 1960 por el entonces Ministro de Hacienda de Brasil, Eugênio Gudin. El monto asciende a US\$ 1.500 millones, lo que equivale hoy a una cifra aproximada de US\$ 13.000 millones, cerca de 70.000 millones de Reales brasileños.

Esto parece una cantidad relativamente pequeña. Sin embargo, en comparación con el producto nacional bruto (PNB) de 1960, la construcción de Brasilia consumió el 10 por ciento del presupuesto nacional. Esto representaría hoy en día cerca de US\$ 140.000 millones o 750.000 millones de Reales, una cantidad mucho más significativa. Esta cifra, sin embargo, todavía no brinda la imagen completa, ya que muchas de las obras de construcción se llevaron a cabo después de 1960.

Con una cuenta de tal envergadura surgió otro problema: el gobierno brasileño simplemente no tenía suficiente dinero para pagarla. La ‘solución’ adoptada fue crear más dinero. Esto, a su vez, contribuyó a una de las tasas de inflación más altas en la historia del país, lo que provocó aumentos considerables en los precios de los alimentos y de otros productos básicos. También contribuyó a un período de inestabilidad política que fue precursor del golpe militar de 1964, con el cual se instauró una dictadura que duró hasta 1985. (9)

Indonesia ya es un país muy endeudado. ¿Quién pagará la cuenta de este megaproyecto, cuyo costo se estima en unos US\$ 32.700 millones? (10) El gobierno se ha comprometido a cubrir ‘solo’ el 20 por ciento del costo, mientras que el resto lo pagarán los inversores. El gobierno afirma que hay numerosos inversores interesados. Sin embargo, lo más probable es que inviertan en el marco de asociaciones público-privadas, para lo cual el gobierno debe desempeñar el papel de ‘gerente de marketing de ventas’, proporcionando incentivos y exenciones fiscales para garantizar los beneficios y las ganancias de los inversores. En última instancia, el costo lo pagará el pueblo de Indonesia. (11)

Parar IKN, la nueva capital para recolonizar el país

Hasta el día de hoy, y desde hace más de 60 años, la comunidad *quilombola* que fue desalojada para la construcción de Brasilia sigue luchando por demarcar al menos una ínfima parte de lo que fueron sus territorios. (12) De igual manera, el Pueblo Indígena Balik que enfrenta la construcción de la nueva capital de Indonesia, continúa alzando su voz.

Dahlia es una bailarina de una comunidad Balik de la zona donde está prevista la nueva capital. Ella dice: “No puedo imaginar lo que pasará cuando el proyecto esté listo para ser implementado”, (...), “Nadie quiere escuchar nuestras voces. Quiero llorar y gritar. Me siento colonizada a pesar de que estamos en un país libre e independiente”. (13)

Un sorprendente paralelismo entre las historias de las nuevas capitales es cómo ambos proyectos solo refuerzan un Estado colonial, a pesar de que sus promotores afirmen lo contrario. Ambos proyectos dominan y destruyen los espacios de vida y territorios de las comunidades del bosque en función de intereses económicos y políticos. Y ambas capitales también promueven políticas de apartheid social.

Sin embargo, ambas historias también dejan de manifiesto el papel de las luchas sociales como una forma de detener y revertir una historia de colonialismo y otras opresiones estructurales que incluyen el racismo, el capitalismo y el patriarcado. Detrás de los discursos de los presidentes y la falsa propaganda sobre las nuevas capitales, las comunidades de ambos países son las protagonistas de las luchas por la defensa y la recuperación de sus tierras, ríos y bosques, de los que depende su cultura e identidad.

Cuando a partir de 1964 la dictadura militar de Brasil ‘abrió’ el país para asegurarles ganancias a las élites brasileñas y, en particular, a las internacionales, su proyecto era ‘matar’ la cultura y la

identidad de los Pueblos Indígenas y de otras comunidades tradicionales, integrándolos por la fuerza a la sociedad más grande, llamada ‘moderna’. Pero los Pueblos Indígenas continuaron resistiendo. En 1980 se fundó la primera organización indígena en el Estado amazónico de Acre, llamada UNI, y unas 500 más la siguieron en los años posteriores. Junto con otros movimientos sociales, su resistencia se hizo tan fuerte que derrocó a los militares en el poder. Una nueva Constitución sentó las bases para reparar una pequeña parte de la deuda histórica con las comunidades indígenas y tradicionales. Sin embargo, el hecho de que hoy en día el 26 por ciento del territorio amazónico esté controlado por Pueblos Indígenas no se debe solo a esa nueva Constitución. Es resultado, sobre todo, de las luchas sociales que continúan presionando a una estructura estatal que sigue gobernando en favor de poderosos intereses privados y que conserva numerosas huellas coloniales.

El gobierno de Indonesia aún se encuentra en la etapa inicial de construcción de su nueva ciudad capital y, por lo tanto, aún existe la posibilidad de cancelar el proyecto. Como muestra el ejemplo de Brasilia, construir una nueva capital no tiene nada que ver con construir un país independiente y romper con la época colonial. Los Pueblos Indígenas tienen la clave para entender lo que implica la ruptura con el pasado colonial. Esto incluye un cambio fundamental en la relación del Estado con las personas que habitan los territorios y con los territorios mismos. Una relación en la que hay que dejar de escuchar a los ricos inversionistas nacionales y extranjeros. Ése podría ser un primer paso real hacia la descolonización del país.

Secretariado Internacional del WRM

- (1) Vermelho, Brasília e a mudança da capital para o Planalto Central, 2010, <https://vermelho.org.br/2010/04/22/brasilia-e-a-mudanca-da-capital-para-o-planalto-central/>
- (2) The Guardian, Why is Indonesia moving its capital city? Everything you need to know, 2019, <https://www.theguardian.com/world/2019/aug/27/why-is-indonesia-moving-its-capital-city-everything-you-need-to-know>
- (3) Andrade, 2019. Vencidas a distância e a floresta: a Transbrasiliana e a Amazônia Desenvolvimentista. <https://www.scielo.br/j/tem/a/kKtNtz9YZndkj8XJ4mhg8bR/?lang=pt>
- (4) Jatam East Kalimantan. Factsheet: How Indonesia’s New Capital Megaproject invoked climate disaster and destroyed indigenous people and women of Suka Balik in East Kalimantan, 2022
- (5) Ibid 4
- (6) Ibid 4
- (7) Poder360, Brasília tem bairro com “renda europeia” e regiões tão pobres como a África, 2020, <https://www.poder360.com.br/brasilia-60-anos/brasilia-tem-bairro-com-renda-europeia-e-regioes-tao-pobres-como-a-africa/> y, Poder360, Implantação de Ceilândia foi o apartheid de Brasília, 2020, <https://www.poder360.com.br/brasilia-60-anos/implantacao-de-ceilandia-foi-o-apartheid-de-brasilia/?preview=true>
- (8) Ibid 4; y Oxfam, For richer or poorer: from Brazil to Indonesia, 2016, <https://views-voices.oxfam.org.uk/2016/02/for-richer-or-poorer-from-brazil-to-indonesia/>
- (9) Poder360, Construção de Brasília custou US\$ 1,5 bilhão em valor de 1960, 2020, <https://www.poder360.com.br/brasilia/construcao-de-brasilia-custou-uss-1-5-bilhao-em-valor-de-1960/> and Caos Planejado, Brasília: uma cidade que não faríamos de novo, 2019, <https://caosplanejado.com/brasilia-uma-cidade-que-nao-fariamos-de-novo/>
- (10) Ibid 2
- (11) Ibid 4

Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales (WRM)

(12) BBC News Brasil, 2018. A história do quilombo que ajudou a erguer Brasília – e teme perder as terras para condomínios de luxo. <https://www.bbc.com/portuguese/brasil-44570778>

(13) WRM, La coerción del megaproyecto de la Nueva Ciudad Capital de Indonesia y el abandono del Pueblo Balik, 2022, <https://www.wrm.org.uy/es/articulos-del-boletin/la-coercion-del-megaproyecto-de-la-nueva-ciudad-capital-de-indonesia-y-el>

Ilusiones de carbono en la Amazonía brasileña

Explorando algunos aspectos de un reciente estudio del WRM, señalamos cómo cuatro proyectos REDD en el municipio de Portel, en el estado de Pará, en la Amazonía brasileña, refuerzan ciertas fantasías inherentes a la idea de comercio de carbono desde el mecanismo REDD.

Recientemente, el WRM publicó el estudio “Neocolonialismo en la Amazonía: Proyectos REDD en Portel, Brasil”, sobre cuatro proyectos REDD en el municipio de Portel, en el estado de Pará, en la Amazonía brasileña. (1) Explorando algunos aspectos del referido estudio, trataremos de señalar cómo los proyectos en curso refuerzan ciertas fantasías inherentes a la idea de comercio de carbono desde proyectos REDD.

La iniciativa REDD en Portel está encabezada por inversores de países industrializados y se inició en 2008 con una duración prevista hasta el 2055. Incluye cuatro proyectos que abarcan una superficie total de más de 7.000 km². Sus proponentes afirman llevar a cabo en esta área acciones que impiden la destrucción de los bosques y benefician a la población local. Como contrapartida, así que sus proyectos recibieron la certificación del organismo de certificación privado Verra, pasaron a comercializar los créditos de carbono derivados de las emisiones que supuestamente se evitaron. A pesar de encontrarse aún en sus primeras fases, la iniciativa ya hizo posible la venta de más de 23 millones de créditos de carbono (2) 'producidos' en Portel, lo que equivale a más de US\$ 120 millones, según las estimaciones del estudio.

Lo que llama la atención no son las cifras en sí, sino el grado de financiarización de la naturaleza que representan los mercados de carbono. Para los inversores, se trata de una posibilidad más de generar ganancias controlando la tierra, pero esta vez a través de una mercancía abstracta, el crédito de carbono. Fíjense que a través de un proyecto REDD es posible apropiarse del bosque con un coste mucho menor y mayor discreción que con los monocultivos de soja, la ganadería extensiva o la minería, por ejemplo. Así, la capacidad de generar un considerable margen de beneficio sin que sea necesario ‘producir’ realmente una mercancía física es, al parecer, el motivo más evidente de la eufórica multiplicación de las inversiones en REDD.

Los impulsores de los proyectos REDD en Portel podrían afirmar que se trata de una iniciativa en la que todos salen ganando:

- el proyecto contribuiría a mitigar la crisis climática al reducir las emisiones;
- la población local estaría beneficiándose de las acciones sociales;
- los inversores se verían recompensados económicamente por los servicios ambientales y sociales prestados.

Sobre esta última afirmación, no tenemos ninguna duda: de hecho, los proponentes de los proyectos de Portel están obteniendo un generoso rendimiento de sus inversiones. Lo que pretendemos destacar a continuación son las fantasías relativas a las dos primeras suposiciones.

Reducción de emisiones: un buen cuento

Los cuatro proyectos de Portel ponen de relieve una característica común de los proyectos REDD: contar un buen cuento es un elemento primordial para ‘producir’ y vender créditos de carbono. En el caso de Portel, conscientes de que la destrucción forestal en la Amazonía es un fenómeno real y ampliamente conocido, los promotores de los proyectos parecen haber utilizado este hecho para exagerar la estimación de deforestación en el caso de que estos no se llevaran a cabo. En los proyectos REDD es precisamente esta estimación lo que determina la cantidad de créditos que podrán comercializar los proponentes.

Portel no es una excepción. La naturaleza ficticia del ‘cuento de la deforestación’, supuestamente evitada por los proyectos REDD, se basa en parámetros ‘técnicos’ cuestionables. Uno de ellos, por ejemplo, tiene que ver con el área de referencia adoptada para estimar el avance previsto de la deforestación. Al incluir en su área de referencia la región de la Carretera Transamazónica, la estimación de deforestación en la zona se incrementa considerablemente en caso de no ser implementados. Automáticamente, se incrementa considerablemente el número previsto de créditos de carbono que se generarán y, por tanto, el potencial de beneficios de los proyectos. (3)

Los habitantes de las áreas del proyecto con los que hablamos durante una visita a Portel en mayo de 2022 creen que la estimación de deforestación presentada por sus promotores en caso de que no se lleven a cabo los proyectos no se ajusta a la realidad de sus territorios. En este sentido, no entienden cómo los resultados presentados hasta ahora apuntan a que los proyectos ya han evitado una deforestación tan grande como para generar tantos ingresos. Al fin y al cabo, según los residentes, todo lo que han hecho, al parecer, ha sido donar fogones de leña y canastas de alimentos básicos a los habitantes, rellenar formularios y recoger firmas.

Los dueños de los proyectos podrían sostener que todos los cálculos presentados en los proyectos se basan en metodologías científicas; que las estimaciones y los resultados son verificados por empresas consultoras externas (¡contratadas por ellos mismos!); y que el sistema está acreditado por la principal institución internacional en certificación de créditos de carbono, Verra. Sin embargo, investigadores de distintas universidades demuestran que dichas metodologías han sobrestimado sistemáticamente la capacidad de los proyectos (4) para evitar emisiones. Esos y otros errores ponen en jaque la credibilidad de Verra, sugiriendo que los sistemas de certificación de los proyectos REDD son una pieza clave en la generación de ganancias bajo la excusa de mitigar los impactos ambientales.

Los entusiastas de REDD argumentan que se trata de errores ‘técnicos’ que hay que corregir, o que se necesitan salvaguardias más eficaces. Sin embargo, la jerga y los argumentos ‘técnicos’ sólo enmascaran sus intenciones políticas subyacentes y, sobre todo, desvían la atención del problema

de fondo del mecanismo REDD. Es sabido que la principal causa del calentamiento global son las emisiones generadas por la quema de combustibles fósiles. Ahora bien, si los combustibles fósiles representan una transferencia continua (¡y creciente!) de carbono retenido en el subsuelo a la atmósfera, es ilusorio creer que los ciclos naturales de la biosfera (incluida la mera no destrucción de los bosques) pueden 'compensar' sus emisiones (6). Se trata de una incoherencia estructural de la lógica de los mercados de carbono desde su creación.

También cabe mencionar que a menudo las historias que se cuentan en la documentación de los proyectos REDD consideran a la población local una amenaza para los bosques. En el caso de Portel, el simple hecho de que los proyectos mencionen las actividades de los ribereños (7) como responsables parciales de las emisiones resta peso a la responsabilidad del agronegocio y del extractivismo depredador –que son, en efecto, altamente destructivos.

¿Beneficios para la población local?

Desde el punto de vista social, la iniciativa REDD en Portel tiene dos particularidades. La primera son las acciones de beneficencia – básicamente las ya mencionadas donaciones de fogones y canastas de alimentos, además de la elaboración del Registro Ambiental Rural (CAR por sus siglas en portugués). El CAR es una autodeclaración relativa al uso del suelo exigida por la legislación brasileña. Esas acciones son emprendidas por una organización denominada “Amigos dos Ribeirinhos” [Amigos de los Ribereños], que en la documentación del proyecto se presenta reiteradamente como una entidad benéfica y sin ánimo de lucro. Sin embargo, según los documentos públicos disponibles, se trata de una empresa privada cuyo propietario es el norteamericano Michael Greene, quien, a su vez, aparece como el principal articulador de los proyectos en Portel.

La segunda particularidad es la inclusión de 1252 familias ribereñas como proponentes de uno de los proyectos REDD, junto con la ya mencionada empresa de Michael Greene. Según la documentación, estas familias habrían “firmado un acuerdo confirmando que estaban de acuerdo con el proyecto REDD de créditos de carbono”, y supuestamente estarían representadas por el presidente del Sindicato de Productores Rurales de Portel. Sin embargo, en la base de datos de Verra no hay ningún documento que acredite la firma o el consentimiento legal de las personas que figuran en la lista. Al parecer, no hubo autorización legal por parte de las familias para participar en el proyecto REDD.

Los habitantes con los que hablamos en mayo de 2022 se sorprendieron al saber que los terrenos en los que viven están incluidos en los proyectos. Nunca hubieran imaginado que sus tierras podrían generar una mercancía que desconocen, cuya venta está produciendo unos ingresos de millones de dólares que, obviamente, desconocen. Tampoco podrían haber imaginado que entre los compradores de créditos de carbono de los proyectos de Portel se encuentran algunas de las

mayores empresas del mundo, como los gigantes de la aviación Boeing, Delta Airlines y Air France; Amazon (comercio electrónico); Samsung (tecnología); Repsol (petróleo), entre otras.

Reforzando el argumento del apartado anterior, de que el mecanismo REDD no reduce las emisiones, emprendimientos como el de Portel terminan por avalar los planes de expansión de varias corporaciones a las que no se le pondrá ninguna barrera frente al aumento previsto de sus emisiones. Y es que ahora pueden ‘compensar’ o ‘neutralizar’ esas emisiones comprando créditos certificados a Portel, propagandizando así su supuesta responsabilidad ambiental y social. En términos de ‘beneficios sociales’, por lo tanto, se trata de un plan perverso en el que:

- las personas que viven en la zona de los proyectos pierden la autonomía sobre su territorio, ya que el carbono que se absorbe ya no les pertenece, sino a las empresas contaminantes que los compran;
- las personas que viven alrededor de los proyectos de las empresas contaminantes que compran los créditos seguirán sufriendo sus impactos directos, ya que la supuesta compensación de sus emisiones permite que dichas empresas sigan emitiendo e incluso amplíen sus emisiones;
- los responsables de la crisis climática pueden seguir obteniendo beneficios de la quema de combustibles fósiles e intensificando la crisis climática, cuyos impactos afectan desproporcionadamente a las comunidades del Sur que dependen de los bosques y de la agricultura a pequeña escala.

Colonialismo renovado

A pesar de las particularidades de cada época, el emprendimiento REDD en Portel nos remonta a los comienzos de la colonización europea en Brasil. La diferencia es que, hoy, en vez de espejitos y adornos, los empresarios extranjeros que desembarcan en Portel seducen a la población local con fogones, canastas básicas de alimentos y ayuda para obtener el CAR –que es, de hecho, un documento exigido por la legislación brasileña, pero, más que eso, es un documento fundamental para que los proponentes implementen su proyecto REDD y se apropien de la riqueza producida en esas tierras. El producto valioso que se extrae y se comercializa en el norte global ya no es el palo Brasil, sino el crédito de carbono, una mercancía increíblemente más abstracta. Los colonizadores, antiguamente autoproclamados portadores y difusores de la civilidad, se presentan ahora como salvadores de la selva y baluartes de la mitigación de los impactos de la crisis climática –un problema creado por ellos mismos.

Eficacia y engaño

Por último, la iniciativa en Portel confirma que el mecanismo REDD puede ser bastante eficaz... para algunos: eficaz para apropiarse de tierras forestales en beneficio de intereses privados; eficaz para 'producir' una mercancía invisible en grandes cantidades; eficaz para garantizar beneficios a los inversores extranjeros; eficaz para garantizar el maquillaje verde de las grandes empresas que

compran créditos de carbono. Sin embargo, en términos de capacidad para hacer frente a la crisis climática, la iniciativa de Portel no revela nada nuevo: el mecanismo REDD y los mercados de carbono siguen revelándose como una gran ilusión que, al fin y al cabo, va en dirección contraria al objetivo que justificó su creación. Mientras tanto, a las comunidades que dependen de los bosques les siguen violando, aunque ellas no lo sepan, sus derechos y poniendo en peligro su autodeterminación.

Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales (WRM)

Los hechos sobre la iniciativa REDD en Portel presentados en este breve artículo, así como otros problemas que atraviesan el caso, se pueden comprobar con mayor detalle en el [informe 'Neocolonialismo en la Amazonía: Proyectos REDD en Portel, Brasil' del WRM.](#)

(1) WRM, Neocolonialismo en la Amazonía: Proyectos REDD en Portel, Brasil, Noviembre 2022,

<https://www.wrm.org.uy/es/publicaciones/neocolonialismo-en-la-amazonia-proyectos-redd-en-portel-brasil>

(2) El equivalente a 23 millones de toneladas de carbono que supuestamente se habrían liberado a la atmósfera en ausencia de los proyectos.

(3) Para una mejor comprensión de cómo se realizan tales estimaciones, véase la publicación del WRM "10 alertas sobre REDD para comunidades", disponible en <https://www.wrm.org.uy/es/publicaciones/10-alertas-sobre-redd-para-comunidades>

(4) PNAS, Overstated carbon emission reductions from voluntary REDD+ projects in the Brazilian Amazon, 2022, <https://www.pnas.org/doi/10.1073/pnas.2004334117>

(5) The Guardian, Carbon offsets used by major airlines based on flawed system, warn experts, 2021, <https://www.theguardian.com/environment/2021/may/04/carbon-offsets-used-by-major-airlines-based-on-flawed-system-warn-experts>

(6) WRM, ¿Todos los tipos de carbono son iguales? Carbono fósil, violencia y poder <https://www.wrm.org.uy/es/15-a-%C3%B1os-REDD-tipos-de-carbono>

(7) El término "ribereños" se refiere a la población tradicional que vive en las riberas de los ríos, cuyas principales actividades económicas son la pesca, la extracción de frutas y la agricultura de subsistencia.

América del Sur: la destrucción 'verde' de la selva amazónica

La mayoría de las causas de la deforestación que se identificaron en un análisis mundial liderado por la ONU en 1999 aún siguen vigentes. No obstante, las 'soluciones' propuestas desde entonces se han convertido en nuevas causas subyacentes de la deforestación. En este escenario, los proyectos que destruyen el bosque y los proyectos 'verdes' dependen uno del otro para ser viables.

Desde hace décadas, el continente latinoamericano, incluido el Caribe, ha tenido la tasa de deforestación tropical más alta del mundo, en comparación con África y Asia. Gran parte de esta destrucción en América Latina se concentra en la región amazónica. En 2021, entre los 10 países con mayor pérdida de bosques tropicales primarios del mundo, Brasil, Bolivia, Perú y Colombia ocupan el primer, tercer, quinto y sexto lugar respectivamente.

Para comprender el proceso de deforestación es necesario comprender no solo sus causas más visibles -como la tala y extracción ilegal de madera, o el avance del agronegocio y la minería-, sino, sobre todo, las causas subyacentes. Estas tienden a ser ocultadas, menos discutidas y mal comprendidas, y están estrechamente vinculadas a las diversas formas de opresión del sistema capitalista-racista-patriarcal, así como al legado colonial. Además, más recientemente, es necesario comprender cómo proyectos promovidos como "soluciones" a la crisis climática se han convertido en nuevas causas subyacentes de la deforestación.

El primer y último análisis integral de estas causas a nivel mundial coordinado por las Naciones Unidas (ONU) se realizó en 1999, con una importante participación de la sociedad civil en los principales países con bosques. Lo que más llama la atención es que la gran mayoría de ellas siguen siendo de extrema actualidad (1):

- los grandes proyectos de 'desarrollo' o de infraestructura, como represas, carreteras, proyectos mineros y de extracción de petróleo, se perpetúan en una alianza entre el Estado y el gran capital;
- el agronegocio, probablemente más destructivo que en 1999, sigue avanzando y forma parte de un proceso más amplio de tala y extracción ilegal de madera, incendios forestales, especulación y acaparamiento de tierras;
- los patrones de inversión, deuda, las políticas macroeconómicas, los flujos mundiales de *commodities* y las relaciones comerciales siguen siendo fundamentales en los procesos de deforestación en todo el mundo;
- la legislación permite, por ejemplo, otorgar tierras estatales a grandes empresas del sector maderero, minero o de plantaciones de árboles;
- los diversos proyectos de 'conservación de la naturaleza' continúan hostigando y saqueando a los pueblos de los bosques para establecer áreas protegidas oficiales;
- los Estados, las grandes empresas, las ONGs conservacionistas (o los tres al mismo tiempo), siguen utilizando métodos militarizados para centralizar el control de los bosques;

- persiste el no reconocimiento de los derechos territoriales de los Pueblos Indígenas y comunidades tradicionales, así como la discriminación. En los últimos años ha habido una creciente criminalización de comunidades y pueblos mientras que las actividades destructivas son ‘despenalizadas’ y a veces hasta fomentadas explícitamente;
- el debilitamiento de las condiciones para la supervivencia y las luchas de las y los defensores de los bosques continúa socavando la protección de estos territorios.

Las viejas-actuales causas de la deforestación

La deforestación en América Latina y el Caribe es mayor no solo porque la selva amazónica es el bosque tropical más grande del mundo, sino también por la escala y la velocidad de los avances del agronegocio, la minería, la extracción de combustibles fósiles y de obras de infraestructura.

En Venezuela, por ejemplo, impulsada por la crisis económica, se instaló un extractivismo depredador basado no tanto en el petróleo sino en otras formas de minería. El principal proyecto se denomina Arco Minero de Orinoco, que cubre el 12 por ciento del territorio nacional, parcialmente en la región amazónica venezolana, con capital privado e internacional. En 2016, el gobierno creó una Zona Económica Especial, una área geográfica con leyes especiales que debilitan radicalmente las normas ambientales y los derechos sociales, entre otros problemas. Al mismo tiempo, el gobierno estableció acuerdos con las empresas involucradas, cuyos detalles no se han hecho públicos. Además, se le otorgaron poderes especiales al ejército para garantizar la continuidad de la minería y reprimir la resistencia. (2)

Otro ejemplo son las obras de infraestructura, realizadas bajo el discurso de promover el ‘desarrollo’ y la ‘integración’ de América del Sur. Estas carreteras, vías férreas e hidrovías, así como puertos, aeropuertos y centrales hidroeléctricas, sirven sobre todo para exportar la cada vez mayor cantidad de *commodities* y productos que resultan de las actividades extractivas. No atienden las demandas de las poblaciones de la región, dejando únicamente impactos negativos, muchas veces devastadores.

El plan principal para América del Sur es la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA). El Plan IIRSA fue lanzado en el año 2000 por 12 gobiernos de América del Sur, contemplando más de 500 proyectos. Gradualmente, las inversiones en infraestructura se transformaron en la forma más nueva de expansión del capital financiero con el potencial de generar grandes ganancias, especialmente a través de asociaciones público-privadas ventajosas para el sector privado, mientras que los gobiernos nacionales asumen los riesgos. Hoy en día son megacorredores que conectan los lugares donde la extracción es más barata con los centros de fabricación y consumo a una escala y velocidad cada vez mayor. (3)

Un ejemplo es la construcción del tramo entre el municipio de Cruzeiro do Sul, en Brasil, y Pucallpa, en Perú, de la carretera interoceánica, que conectaría el noroeste de Brasil con el suroeste de Perú, cuya construcción comenzó hace más de 20 años. Los Pueblos Indígenas de ambos países se opusieron en una carta abierta al proyecto, denunciando que “la construcción de

la carretera está dentro de un modelo de desarrollo depredador que incluye la explotación de minerales, madera, petróleo y gas. En la región, con la cuenca de agua dulce superficial más grande del mundo, aún existen territorios indígenas sin demarcar y la presencia de pueblos en aislamiento voluntario que continúan siendo ignorados y negados”. (4)

A los impactos ya dañinos de las carreteras se suman los impactos de los proyectos ferroviarios en la Amazonía brasileña. El llamado “Ferrogrão”, por ejemplo, que unirá el norte del estado de Mato Grosso con el puerto de Miritituba, en el río Tapajós, en Pará, pasaría por unidades de conservación y territorios indígenas, y tiende a agravar aún más los impactos de la carretera BR-163, que ingresa a la Amazonía desde la región centro-oeste, la mayor productora de granos del país. Históricamente, proyectos como estos fueron los principales impulsores del aumento de la deforestación, generando impactos devastadores en las poblaciones de los bosques.

La destrucción ‘verde’: nuevas causas subyacentes de la deforestación

Que las causas subyacentes de la deforestación identificadas en 1999 sigan vigentes no significa que nada haya cambiado. La mayoría de las ‘soluciones’ propuestas para combatir la deforestación provocada desde entonces por gobiernos, bancos, grandes ONGs, entre otros, se han convertido en nuevas causas subyacentes.

La principal es el mecanismo REDD, sigla que significa Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación Forestal. REDD surgió en 2005 como parte de las conferencias climáticas de la ONU con la promesa de reducir y combatir la deforestación de manera rápida, sencilla y económica y, por lo tanto, reducir las emisiones de carbono a la atmósfera y el impacto del cambio climático. El argumento es que sería más ventajoso ‘mantener el bosque en pie’ que talarlo.

En los bosques tropicales, una empresa u ONG elige un área de bosque que supuestamente está amenazada, y hace una proyección de cuánto sería la deforestación en esa área en un período de entre 30 y 50 años. A partir de ahí, se hace un cálculo hipotético de cuántas hectáreas se conservarían si se implementara allí el proyecto REDD y, en base a ello, la cantidad de carbono que se estaría evitando emitir. Estos cálculos son la base para la emisión de créditos de carbono, certificados por empresas consultoras, para ser vendidos.

Estos créditos son comprados, por ejemplo, por empresas de los sectores de la extracción de petróleo, aviación, agroindustria o minería, la mayoría de ellas con sus oficinas en el norte. Estas empresas ‘compensan’ la contaminación que generan diciendo que están conservando bosques lejanos. Con ello, ‘compran’ el derecho a contaminar la atmósfera con una cantidad de carbono supuestamente equivalente a la cantidad ‘almacenada’ en el área de bosque cuya destrucción se habría ‘evitado’. La ‘compensación’, por lo tanto, es la palabra clave del mecanismo REDD.

Las comunidades que viven en y con los bosques son consideradas culpables de la deforestación, y por tanto se les impide utilizar sus bosques y realizar actividades fundamentales para su sustento. Así, REDD refuerza el falso supuesto que no hay posibilidad de coexistencia entre las poblaciones

y los bosques, generando problemas a las comunidades en ambos extremos: en los bosques donde se instalan los proyectos (5), pero también en las comunidades que viven alrededor de las actividades de las empresas del norte global que, con REDD, pueden seguir contaminando más.

En más de 15 años del mecanismo REDD, la deforestación no se ha reducido, al contrario. El agronegocio, la minería, los monocultivos, entre otros, siempre han sido más rentables que mantener el ‘bosque en pie’, y esto deja claro los intereses reales: continuar contaminando. Por lo tanto, REDD contribuye a empeorar la crisis climática, en lugar de mitigarla.

Actualmente hay 99 proyectos REDD certificados o en proceso de certificación en los cuatro países con mayor deforestación en la región amazónica (Brasil, Bolivia, Perú y Colombia), además de un número desconocido de proyectos no certificados.

También hay varios programas propuestos por los gobiernos de la región amazónica. En Colombia, por ejemplo, un decreto de 2017 permite que las empresas no paguen los impuestos establecidos por contaminar el aire, mediante la compra de ‘compensaciones’, incluyendo proyectos REDD.

También existen programas REDD de los gobiernos estatales, como los de los estados de Acre y Mato Grosso en Brasil, financiados por los gobiernos de Alemania, Noruega y del Reino Unido. El pago, en este caso, no proviene de la venta de créditos de carbono, sino que se basa en supuestos ‘resultados’ en la tasa de deforestación, realizados en un cierto período convenido entre las partes. Dependiendo de la tasa de deforestación acordada y el año base para establecer la comparación, el resultado puede ser opuesto al deseado, otorgando pagos incluso si la deforestación está aumentando, como ha sido en Mato Grosso. (6) Además, si bien el financiamiento de este tipo de programas REDD no proviene del mercado de carbono, uno de sus principales objetivos es preparar a estos estados para que puedan ingresar a este mercado lo más rápido posible.

El nuevo REDD: Soluciones basadas en la naturaleza (SBN)

El fracaso de REDD en reducir la deforestación sugiere que la idea debería ser abandonada, pero no es así. Para algunos, REDD no ha sido un fracaso: las grandes ONGs de conservación, las empresas del mercado de carbono, las consultoras que elaboran y validan los proyectos, los gobiernos nacionales y estatales, las certificadoras, entre otros, se embolsaron en conjunto miles de millones de dólares en los últimos 15 años a causa de REDD. Este, a su vez, tampoco ha sido un fracaso para las grandes empresas, como las petroleras, que han podido expandir sus actividades contaminantes diciendo que ‘compensan’ sus emisiones.

Pero sí decidieron cambiar el nombre. REDD ahora se conoce cada vez más como “Soluciones basadas en la naturaleza” (SBN). Las SBN se vuelven aún más peligrosas para las comunidades que dependen del bosque porque están vinculadas a otra propuesta, el plan denominado “30x30”, que pretende conservar el 30 por ciento de la superficie del mundo para 2030.

La frase mágica del momento de las industrias a nivel mundial es la de alcanzar emisiones 'neutrales en carbono'. Como resultado, existe una verdadera competencia por la apropiación de cada vez más tierras con bosques por parte de empresas y ONGs. Muchas comunidades están siendo acosadas para firmar contratos para que puedan vender créditos de carbono a industrias internacionales, ONGs y, cada vez más, también a empresas y gobiernos nacionales. Como es una nueva tendencia, todavía no es posible encontrar fácilmente nuevos proyectos de SBN en la Amazonía. Pero éstos prometen seguir la lógica del mecanismo REDD mientras que ya encontramos algunos proyectos REDD que están siendo re-nombrados como iniciativas de SBN.

El agronegocio brasileño es uno de los sectores que más se ha destacado en promocionar actividades de SBN a nivel mundial, por ejemplo, ampliando la plantación de árboles con el monocultivo de eucalipto y la llamada 'agricultura baja en carbono'. Se trata de un conjunto de planes que incluyen agregar aditivos a los alimentos para animales y la introducción de prácticas agrosilvícolas y de manejo del suelo. Todo esto no es más que una aberración si tenemos en cuenta los planes de la industria de mega expansión, incluyendo a los incendios y la deforestación necesaria para que pueda ejecutarlos. Asimismo, está el consumo de derivados del petróleo en toda su cadena de producción, incluidos los fertilizantes químicos y agrotóxicos, lo que ayuda a explicar por qué la cadena alimentaria basada en el agronegocio ya es responsable de hasta el 37 por ciento de todas las emisiones globales de gases de efecto invernadero.

Economía 'baja en carbono' o economía 'verde'

Los actores del gran capital financiero-industrial sin embargo no solo piensan en pintarse de 'verde', sino que también afirman el haber puesto en marcha un proyecto de transición de la base energética. Lejos de ser una transformación hacia una economía más justa climática y socialmente, pretenden mantener y fortalecer su hegemonía y poder, con la llamada economía 'baja en carbono' o economía 'verde'.

Es un error pensar que esta nueva matriz energética, basada en energía eólica, mega hidroeléctricas, biomasa, energía solar, entre otras, reducirá la deforestación y/o las actividades extractivas. Por el contrario, estos proyectos también demandarán grandes cantidades de tierra. El símbolo de la economía 'baja en carbono' es el auto eléctrico y, para su producción, éste necesita, además de los metales y minerales habituales (como el hierro y el aluminio), una serie de nuevos minerales y metales cuya extracción supondrá aún más destrucción y deforestación.

Ecuador es un ejemplo de cómo la economía 'baja en carbono' ya está impactando el bosque y sus poblaciones. En los últimos años, ha habido una verdadera presión para extraer árboles de balsa, una madera ideal en la creciente industria de turbinas eólicas. Ecuador ya se ha convertido en el mayor exportador mundial de esta madera, primordialmente hacia China. Irónicamente, mientras China anuncia metas de emisiones 'carbono neutrales' a base de más parques eólicos, la destrucción de los bosques en busca de árboles de balsa en Ecuador, y también en Colombia y Perú, continúa aumentando. Esto además genera otros impactos, incluyendo los problemas que provocan los aserraderos móviles en las comunidades, como la contaminación de los ríos; el

desequilibrio en el bosque con la extracción desenfrenada; los impactos sociales como la explotación laboral, los conflictos y las divisiones dentro de las comunidades. (7)

Consideraciones finales

El discurso de la economía 'baja en carbono' es extremadamente conveniente para las empresas que realmente destruyen los bosques a gran escala, así como para quienes se benefician con su implementación, incluyendo a las ONGs de conservación, las certificadoras de proyectos de 'compensación', los inversionistas financieros, etc.

Este discurso incluye propuestas y mecanismos perversos, como REDD y las SBN, porque su objetivo central es crear las condiciones para la supervivencia de las industrias contaminantes (y de sus ganancias), al mismo tiempo que desequilibran gravemente el clima en un corto plazo. Estas propuestas conducen a una carrera desenfrenada por las tierras de las comunidades, aumentando la presión sobre sus territorios tanto por las actividades destructivas habituales, así como por los nuevos ataques 'verdes'.

Es un escenario que apunta a la importancia de fortalecer la resistencia en los territorios, así como la articulación, unión y solidaridad mutua entre las comunidades impactadas. Especialmente porque en este escenario, los proyectos que destruyen el bosque y los proyectos 'verdes' dependen uno del otro para ser viables: ambos son parte de la misma lógica nefasta que necesita ser expuesta y combatida.

Secretariado Internacional del Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales (WRM)

* Este es un resumen de un artículo publicado en el dossier "El rastro del fuego del Agronegocio global". Puede acceder aquí al [artículo completo en portugués](#); y puede acceder [al dossier en español](#), portugués e inglés.

(1) WRM, "Cómo las políticas y las agencias sobre bosques promueven la destrucción sostenible", 2022. Disponible para consulta en la página electrónica: <https://www.wrm.org.uy/es/publicaciones/como-las-politicas-y-las-agencias-sobre-bosques-promueven-la-destruccion-sostenible>

(2) Emilio Teran Mantovani, "Crisis y agotamiento del modelo petrolero en Venezuela: la mega-minería y las nuevas fronteras de la extracción", 2017, <https://www.wrm.org.uy/es/articulos-del-boletin/crisis-y-agotamiento-del-modelo-petrolero-en-venezuela-la-mega-mineria-y-las-nuevas-fronteras-de-la> y Emilio Teran Mantovani: "La minería depredadora en Venezuela: Arco Minero del Orinoco, economías de enclave y Plan Minero Nacional", 2021, <https://www.wrm.org.uy/es/articulos-del-boletin/la-mineria-depredadora-en-venezuela-arco-minero-del-orinoco-economias-de-enclave-y-plan-minero>

(3) Nick Hildyard, "Infraestructura cada vez más extrema", 2019, <https://www.wrm.org.uy/es/articulos-del-boletin/infraestructura-cada-vez-mas-extrema>

(4) Documento final del Seminario Binacional Brasil/Perú Amazonía: *Sociobiodiversidade, resistência ao modelo desenvolvimentista predatório*, 2022, <http://lindomarpadilha.blogspot.com/> (disponible solo en Portugués).

(5) WRM, "REDD: una colección de conflictos, contradicciones y mentiras", 2014, <https://www.wrm.org.uy/es/publicaciones/redd-una-coleccion-de-conflictos-contradicciones-y-mentiras>

Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales (WRM)

(6) Jutta Kill, REDD, no solo un fracaso, en "15 años de REDD: Un mecanismo intrínsecamente corrupto",

<https://www.wrm.org.uy/es/15-anos-REDD-no-solo-un-fracaso>

(7) Acción Ecológica, Paradojas verdes de un país amazónico, 2021,

<https://www.wrm.org.uy/es/articulos-del-boletin/paradojas-verdes-de-un-pais-amazonico>

RECOMENDADOS

La producción de palma aceitera explota a poblaciones negras e indígenas en Brasil

El portal de noticias Metrôpoles recorrió 5.700 km para denunciar cómo la cadena de producción del aceite de palma afecta a las comunidades quilombolas y a los Pueblos Indígenas del estado de Pará, Brasil. Existe una historia de trabajo análoga a la esclavitud, expropiación de comunidades tradicionales e impactos medioambientales. Las comunidades quilombolas e indígenas denuncian la invasión de sus territorios por parte de grandes empresas, principalmente Agropalma y Brasil BioFuels, que bloquean la entrada de residentes a las regiones. Se acusa a estas empresas de tener vínculos con pistoleros que amenazan a los líderes comunitarios y devastan culturas y territorios centenarios. El informe establece un interesante paralelismo entre estos monocultivos y cómo se cultiva y utiliza la palma aceitera en Bahía, donde el cultivo es plantado por la población y para su propio beneficio, procesado y utilizado localmente, y forma parte de la identidad y la cultura del pueblo. Lea y vea el vídeo en portugués aquí

<https://www.metropoles.com/materias-especiais/ouro-liquido-producao-de-dende-explora-populacoes-negras-e-indigenas-no-brasil-2>

Compañía de aceite de palma, policías y militares atacan masiva y violentamente a pobladores de la República Democrática del Congo

En septiembre de 2022, dos grandes contingentes de la policía nacional y militar fueron enviados a las zonas de concesión de plantaciones de palma aceitera de Plantations et Huileries du Congo (PHC) en Lokutu y Boteka. Según PHC, estos contingentes fuertemente armados fueron enviados de conformidad con una solicitud presentada por PHC al gobierno de la República Democrática del Congo, aparentemente para ayudar a impedir el robo de nueces de palma de sus plantaciones por parte de los pobladores que viven dentro y alrededor de las concesiones de la empresa.

Acceda a un resumen de lo que ocurrió, basado en información recopilada por RIAO-RDC a través de sus miembros locales, entrevistas a los pobladores afectados y una misión de investigación en Boteka, realizada en octubre de 2022 por dos miembros de la oficina nacional de RIAO-RDC. El resumen está en inglés aquí

<https://www.farmlandgrab.org/post/view/31235-palm-oil-company-police-and-military-conduct-massive-violent-rampage-against-villagers-in-the-dr-congo>

y en francés aquí <https://www.farmlandgrab.org/post/view/31234-une-societe-d-huile-de-palme-des-policiers-et-des-militaires-se-livrent-a-un-dechainement-massif-et-violent-contre-des-villageois-en-rd-congo>

Familias de la República del Congo son despojadas de sus tierras para dar paso a un proyecto de compensación del gigante petrolero Total

Una investigación de SourceMaterial y Unearthed reveló algunos de los impactos de un importante proyecto de compensación de carbono con plantación de árboles del gigante petrolero TotalEnergies, que había sido anunciado a fines de 2021 en la República del Congo. Para obtener acceso a la tierra, Total se asoció con Forest Congo Neutral (FNC) para plantar árboles en la

Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales (WRM)

reserva de Lefini, parte de las Mesetas Batéké. FNC, que arrendó la tierra al gobierno congoleño, es una subsidiaria de Forêt Ressources Management (FRM), una consultora francesa. Pero el proyecto ha tenido un alto costo para las familias de las Mesetas Batéké, que han vivido en y de esta tierra por generaciones. Pueden leer el informe completo en inglés aquí:

<https://unearthed.greenpeace.org/2022/12/12/total-congo-offsetting-land-dispossessed/>

Y pueden ver un video de la investigación en francés aquí:

<https://www.mediapart.fr/journal/ecologie/121222/derriere-le-greenwashing-de-totalenergies-l-expropriation-de-paysans-au-congo>

Todos los artículos del Boletín pueden ser reproducidos y difundidos con la siguiente fuente: Boletín 264 del Movimiento Mundial por los Bosques tropicales (WRM): “Reflexiones, historias y luchas contra la violencia de la economía verde” (<https://wrm.org.uy/es/>)

[Suscríbete al Boletín del WRM](#)

El Boletín busca apoyar y contribuir con las luchas de los pueblos en la defensa de sus territorios y bosques.

La suscripción es gratuita.

¿Te perdiste la edición anterior del boletín del WRM
“En solidaridad con las comunidades que resisten a los monocultivos de árboles”?

[Puedes acceder a todas las ediciones pasadas del boletín del WRM en este link](#)

Boletín del Movimiento Mundial por los Bosques (WRM)

Este boletín está disponible también en inglés, francés y portugués

Editora: Joanna Cabello

Apoyo editorial: Lucía Guadagno, Edmundo Hoppe Oderich, Jutta Kill, Winfridus Overbeek y Teresa Pérez

Secretariado internacional del WRM

Av. Bolivia 1962 Bis, CP 11500 Montevideo, Uruguay

Teléfono y fax: 598 26056943

wrm@wrm.org.uy

<http://wrm.org.uy/es>